

Señores

JUZGADO DÉCIMO (10º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTE: ANA CAROLINA ARENAS RAMÍREZ Y OTROS
DEMANDADO: OMAR TENORIO TRUJILLO Y OTROS
LLAMADO EN GARANTÍA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
RADICACIÓN: 760013103010-2024-00033-00

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, persona jurídica identificada con NIT 891.700.037-9, de conformidad con el certificado adjunto en donde figura inscrito el poder general conferido a través de escritura pública No. 1804 del 20 de junio de 2003 en la Notaría 35 del Circuito de Bogotá D.C. con dirección de notificaciones njudiciales@mapfre.com.co. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** Declarativa de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por la señora ANA CAROLINA ARENAS RAMÍREZ Y OTROS en contra de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Y OTROS y en segundo lugar, **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por los demandados TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO TENORIO RIVERA LTDA y OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO en contra de mi mandante, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anunciando desde ahora que me opongo a las totalidad de las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

CUESTIÓN PREVIA: OPORTUNIDAD PROCESAL

El auto que admitió el llamamiento en garantía a mi representada fue proferido por el Despacho el 16 de enero de 2025 y fue notificado a través del Estado No 005 del 20 de enero de 2025. Ahora bien, como quiera que MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A., ya se encontraba vinculada al proceso, por lo tanto, es aplicable el parágrafo del artículo 66 del C.G.P., según el cual

no es necesaria la notificación personal del auto que admite el llamamiento en garantía cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes. El mismo artículo citado indica que el traslado del llamamiento se realizará por un término igual al de la demanda inicial, y así fue dispuesto por el auto que admitió el llamamiento en garantía.

Ahora bien, el auto que admitió la demanda el cual fue proferido el 19 de febrero de 2024 indicó que el traslado de esta se surtiría por el término de 20 días, mismo término entonces que aplica al traslado del llamamiento en garantía. Siendo así las cosas y como quiera que la providencia que admitió el llamamiento en garantía fue notificada por estado electrónicos el 20 de enero de 2025, el término para dar contestación a la demanda y al llamamiento en garantía para MAPFRE SEGUROS GENERAL COLOMBIA S.A., correrá entre los días 21 de enero de 2025 y el 17 de febrero de 2025.

CAPÍTULO I.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

FRENTE AL HECHO “1”: Este hecho contiene distintas afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta la ocurrencia del supuesto accidente de tránsito, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.
- A mi representada no le consta que la señora Ana Carolina Arena Ramírez haya sido pasajera de la motocicleta UGP-67E, de modo que deberá probarse lo afirmado según el principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “2”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “3”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “4”: mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación

no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “5”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “6”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. No obstante, es necesario recalcar que no existe dentro del expediente prueba que dé cuenta de la actividad laboral desempeñada por la señora Ana Carolina Arenas Ramírez al momento del supuesto accidente.

FRENTE AL HECHO “7”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Sin embargo, de acuerdo con el informe policial de accidentes de tránsito que se allegó al expediente es cierto que el señor Omar Tenorio, conductor del vehículo UBX-418, se desplazaba Avenida 8 Norte con Calle 24, sentido Norte – Sur de la ciudad de Cali.

FRENTE AL HECHO “8”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Sin embargo, de acuerdo con el informe policial de accidentes de tránsito que se allegó al expediente es cierto que el señor Yohan Cuervo Cuervo, se desplazaba en motocicleta de placas UGP-67E, sobre la Calle 24 con Avenida 8 Norte, dirección Este – Oeste de la ciudad de Cali, en la que se encontraba como pasajera la señora Ana Carolina Arenas Ramírez

FRENTE AL HECHO “9”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “10”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias no hacen parte de las labores ordinarias de la compañía aseguradora. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar

su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso resaltar lo señalado el Informe de Accidente de Tránsito, el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E, quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

13. OBSERVACIONES
* HIPOTESIS: NO RESPETAR SEÑAL DE TRANSITO "PARE" (AFUJA A UGP67E).

En este sentido, y teniendo en cuenta lo expuesto en el IPAT, lo manifestado por la parte demandante sobre la causa del accidente no se ajusta a la realidad, pues el accidente fue causado por un tercero, específicamente por la imprudencia e impericia del señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, conductor de la motocicleta UGP-67E.

FRENTE AL HECHO “11”: No es un hecho, es una mera apreciación subjetiva que realiza el apoderado judicial de la parte actora. No obstante, es notable que la señora Arenas Ramírez se movilizaba en una motocicleta, por lo cual se expuso al ejercicio de una actividad peligrosa. Por lo demás, en este caso no se aportaron pruebas que vinculen de manera directa la actuación del conductor del vehículo UBX-418 con el resultado lesivo reclamado, lo cual es un elemento esencial para establecer la responsabilidad. Sin esta relación causal probada, no es posible atribuirle al conductor o al vehículo asegurado la responsabilidad por los daños alegados.

Por el contrario, es preciso resaltar lo señalado el Informe de Accidente de Tránsito, en el que se indica que el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E, quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

13. OBSERVACIONES
* HIPOTESIS: NO RESPETAR SEÑAL DE TRANSITO "PARE" (AFUJA A UGP67E).

FRENTE AL HECHO “12”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Sin embargo, se reitera que las causas del accidente del 27 de enero del 2021 devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E (en la que se desplazaba como parrillera la demandante), quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

FRENTE AL HECHO “13”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar

su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. No obstante, es importante resaltar que la señora Ana Carolina Arena Ramírez presentaba varios antecedentes de salud y lesiones físicas, como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 25 de noviembre de 2005, cuando fue atropellada por una camioneta, lo cual le generó múltiples complicaciones y fracturas, tal como se evidencia en los documentos aportados al expediente.

ANTECEDENTES:

Médico legales: El 25 de noviembre de 2005 cuando iba como peatón y fue atropellada por una camioneta, por lo cual fue valorada en 3 ocasiones en Clínica Forense, así:

*Primer Reconocimiento Médico Legal con Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales con radicación interna: 2005C-06040521928 de fecha 19 de diciembre de 2005.

*Segundo Reconocimiento Médico Legal con Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales con radicación interna: 2006C-06040500808 de fecha 23 de enero de 2006.

*Tercer Reconocimiento Médico Legal Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales con radicación interna: 2006C-06040501877 de fecha 14 de marzo de 2006, que anota en sus partes pertinentes: ANAMNESIS: Examinada hoy 14 de marzo 2006 en INML Y CF Sede de San Fernando Cali, en su tercer reconocimiento por antecedente de accidente de tránsito el 25/11/2005 con fractura de fémur derecho. luxación anterior y fractura subcapital de hombro

Además, se reitera que las causas del accidente del 27 de enero del 2021 devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E, quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

FRENTE AL HECHO “14”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. No obstante, es importante resaltar que la señora Ana Carolina Arena Ramírez presentaba varios antecedentes de salud y lesiones físicas, como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 25 de noviembre de 2005, cuando fue atropellada por una camioneta, lo cual le generó múltiples complicaciones y fracturas, tal como se evidencia en los documentos aportados al expediente. Además, se reitera que las causas del accidente del 27 de enero del 2021 devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E (en la que se desplazaba como parrillera la demandante), quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

FRENTE AL HECHO “15”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. No obstante, es importante resaltar que la señora Ana Carolina Arena Ramírez presentaba varios antecedentes de salud y lesiones físicas, como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 25 de noviembre de 2005, cuando fue atropellada por una camioneta, lo cual le generó múltiples complicaciones y fracturas, tal como se evidencia en los documentos aportados al expediente. Además, se reitera que las causas del accidente del 27 de enero del 2021 devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el

conductor de la motocicleta UGP-67E (en la que se desplazaba como parrillera la demandante), quien *no respetó señal de tránsito "PARE"*.

FRENTE AL HECHO "16": A mi representada no le consta que la demandante se encuentre en proceso de calificación de invalidez, en adición a ello, resulta injustificado el cálculo de PCL que la parte demandante realiza de sus propias lesiones, pues no cuenta con sustento científico alguno que permita concluir dicha pérdida de capacidad laboral, consecuentemente, la mención de la PCL equivalente a un 45% resulta ser una mera especulación sin fundamento realizada por la parte actora.

FRENTE AL HECHO "17": A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de tradición que reposa en el expediente se observa que para la fecha de los hechos es cierto que el vehículo de placa UBX418 era propiedad del Transportes Especializados Rodrigo Tenorio Rivera Ltda.

FRENTE AL HECHO "18": Este hecho contiene distintas afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- Es cierto que para el día 27 de enero de 2021, el vehículo UBX-418 estaba cubierto por un seguro de responsabilidad civil extracontractual, materializado en la póliza No. 1501120012387 expedida por mi mandante. No obstante, esto no implica que dicha póliza sea susceptible de ser afectada en el presente proceso, ya que no se ha acreditado la existencia de responsabilidad civil extracontractual del asegurado o del conductor del vehículo UBX-418. Esto impide que se pruebe la ocurrencia del riesgo asegurado bajo la póliza mencionada, dado que los hechos se desencadenaron por la conducta negligente e imprudente del conductor de la motocicleta de placas UGP-67E, en la que se transportaba la señora Arenas Ramírez, tal como se observa en el IPAT allegado al expediente.
- No es cierto que la mencionada póliza no cuente con límites, sublímites y exclusiones pues, como se verá más adelante, la carátula de cada una de las mencionadas pólizas refiere el valor asegurado, y sus condiciones generales estipulan de forma expresa las exclusiones de cada una de ellas.

FRENTE AL HECHO "19": No es cierto que los demandados hayan actuado con impericia e imprudencia que dieran origen a que los demandados sufrieran llanto, dolor, tristeza, congoja, depresión y mucho sufrimiento, pues lo expuesto en el presente hecho es una mera exposición subjetiva la cual no cuenta con ningún respaldo probatorio para determinar su veracidad. Por el

contrario, de acuerdo a los documentos obrantes en el expediente se observa que el Informe de Accidente de Tránsito, establece que el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E (en la que se desplazaba como parrillera la demandante), quien no respetó señal de tránsito “PARE”.

FRENTE AL HECHO “20”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “21”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “22”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones de este hecho, toda vez que tales circunstancias se relacionan con una actuación no surtida con la sociedad que represento. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “23”: No es cierto que los demandados hayan actuado con impericia e imprudencia que dieran origen a que los demandados sufrieran llanto, dolor, tristeza, congoja, depresión y mucho sufrimiento, pues lo expuesto en el presente hecho es una mera exposición subjetiva la cual no cuenta con ningún respaldo probatorio para determinar su veracidad. Por el contrario, de acuerdo a los documentos obrantes en el expediente se observa que el Informe de Accidente de Tránsito, establece que el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por la motocicleta UGP-67E (en la que se desplazaba como parrillera la demandante), quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*.

FRENTE AL HECHO “24”: No es cierto, pues de acuerdo con la plataforma de Mapfre Seguros, la única solicitud que se tiene registrada en relación con este caso es la notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía dentro del proceso en cuestión. Asimismo, se observa en el expediente un documento titulado “SOLICITUD FORMAL DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN CON EL MOTIVO DE OBTENER PROPUESTA DE CONCILIACIÓN E INTERRUPIR EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN” no se evidencia que dicho escrito haya sido debidamente remitido a la compañía aseguradora por medios electrónicos o físicos. Por otro lado, debe ser aclarado igualmente a este despacho que la solicitud aquí relacionada no corresponde a una reclamación formal ya que la misma no acreditó la existencia del siniestro y de la cuantía, incumpliendo con los requisitos contenidos en el artículo 1077 del C.Co,

FRENTE AL HECHO “25”: No es cierto que mi representada deba intereses moratorios desde el 29 de agosto de 2023. De acuerdo con la sentencia SC1947 del 26 de mayo de 2021, los intereses moratorios solo se empiezan a contar una vez se tenga certeza del cumplimiento de las cargas dispuestas en el artículo 1077 del C.Co, es decir, la existencia del siniestro y la determinación de la cuantía. Por lo tanto, únicamente a partir del momento en que quede ejecutoriada la sentencia que declare la responsabilidad del demandado, se otorgará certeza sobre el derecho pretendido y, en consecuencia, se podrán exigir los intereses moratorios.

FRENTE AL HECHO “26”: A mi representada no le consta si los demás demandados vinculados al proceso han indemnizado o no a la parte demandante por los supuestos hechos ocurridos, sin embargo, es cierto que mi mandante no ha pagado indemnización alguna pues no se encuentran acreditados los presupuestos establecidos en el artículo 1077 del C.Co. que permitan concluir el surgimiento de la obligación condicional a cargo de la compañía aseguradora.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.1) DECLARESE”: **ME OPONGO** a que se declare civilmente responsables a los señores Omar Rodrigo Tenorio Trujillo, Transportes Especializados Rodrigo Tenorio Ltda. y a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., toda vez que: **(i)** Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. está vinculada al presente proceso en atención a la póliza de seguro suscrita con el demandante, en ese sentido, su responsabilidad no puede ser solidaria y debe estar supeditada a cláusulas pactadas en el contrato de seguro. **(ii)** En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso fue ejecutado por la demandada en mención (y, por consiguiente, no se ha demostrado la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza expedida por mi mandante). **(iii)** No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por la accionante. **(iv)** Por el contrario, de acuerdo con el IPAT, se acredita la existencia del hecho de un tercero en la producción del evento reprochado por el extremo accionante, puesto que de acuerdo al IPAT allegado, se evidencia que las causas del accidente del 27 de enero del 2021 devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E, quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperar la pretensión declarativa del extremo actor, y por lo tanto deberá negarse.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.2) CONDENAR: CONDENA DIRECTA A LA ASEGURADORA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad; concretamente porque de conformidad con el IPAT, se acredita la existencia del hecho de un tercero en la producción del evento reprochado por el extremo accionante, puesto que de acuerdo al IPAT allegado, se evidencia que las causas del accidente del 27 de enero del 2021, devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el conductor de la motocicleta UGP-67E, quien *no respetó señal de tránsito “PARE”*. Adicionalmente,

me opongo a cualquier tipo de condena directa en contra de mi procurada, comoquiera que la misma no tuvo participación, injerencia y no presencié la ocurrencia del reprochado accidente. Así mismo, no puede perderse de vista que la vinculación de mi procurada se efectuó en atención a un contrato de seguro, el cual requiere del cumplimiento de una serie de especificidades para su afectación, sin pasar por alto, que el Despacho debe descartar que no se cumplan ninguna de las exclusiones pactadas en el contrato aseguratorio emitido por mi representada que impida de alguna manera su afectación.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.3) CONDENAR A PAGAR A TODOS LOS DEMANDADOS LOS SIGUIENTES RUBROS”: ME OPONGO a la presente pretensión debido a que es consecuencial a la anterior pretensión y comoquiera que esta no tiene vocación de prosperidad por resultar improcedente, esta también debe ser desestimada. Sin embargo, procederé a pronunciarme rente a cada petición de la siguiente manera:

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4) LUCRO CESANTE”: ME OPONGO al reconocimiento de este perjuicio en favor de la parte demandante, comoquiera que en adición a que no obran al interior del expediente elementos que permitan dar cuenta de la existencia de responsabilidad en cabeza de la pasiva, de manera que no se puede asumir alguna obligación indemnizatoria derivada de estos hechos. Además, la pretensión es inviable por lo siguiente: (i) no obra prueba idónea, pertinente y conducente de la actividad laboral o económica del demandante como tampoco del monto de sus ingresos, por lo que aquí se indica son meras especulaciones; y (ii) la pretensión de la demanda a título de lucro cesante se tazó con una presunta pérdida de capacidad laboral de un 45%, sin embargo, al revisar el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral que obra en el plenario se puede observar que el porcentaje allí asignado para cuantificar la disminución en la capacidad laboral de la demandante fue de un 30.65%, además, además, dicha PCL parte de un antecedente que está estrechamente relacionado con otro accidente de tránsito en el cual estuvo involucrada la señora Ana Carolina Arenas el cual ocurrió en el año 2005, el cual le ocasionó entre otras lesiones una fractura de fémur. . Por lo anterior, no tiene vocación de prosperar la pretensión por concepto de lucro cesante del extremo actor, y por lo tanto deberá negarse.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.1) PERJUICIOS MORALES”: ME OPONGO En efecto, se destaca que no existe ningún elemento probatorio que acredite de manera certera la gravedad de la lesión sufrida por el demandante, -, o cualquier otro tipo de documentación que permita establecer la naturaleza y gravedad de la lesión de manera objetiva y fundamentada y que de soporte a la suma pretendida por el accionante. En este contexto, la solicitud realizada se percibe como meramente especulativa y es bastante superior a los montos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de muerte o invalidez. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperar la pretensión por concepto de daño moral del extremo actor, y por lo tanto deberá negarse.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.2) PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN”: ME OPONGO a

esta solicitud, pues al no encontrarse estructurados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, es completamente inviable que opere la póliza de seguro. Ahora bien, en cuanto a la existencia y cuantificación del perjuicio a la vida de relación que se alega, debe decirse que no encuentra soporte alguno y se evidencia un claro afán de lucro imposible de atender, al ser exagerada su petición en relación con lo aportado como prueba. En todo caso, el eventual resarcimiento en ningún momento podrá ser superior a la verdadera magnitud del daño causado. Máxime cuando el contrato de seguro de daños tiene un carácter indemnizatorio, por lo que, no puede constituirse como una fuente de enriquecimiento. Debe decirse que esta pretensión es completamente impróspera pues, en primer lugar, el reconocimiento del daño a la vida en relación, se da única y exclusivamente a la víctima directa de una lesión en razón al daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones. Por lo demás, no se acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dicho rubro. En efecto, se destaca que no existe ningún elemento probatorio que acredite de manera certera la gravedad de la lesión sufrida por el demandante, -, o la afectación que la misma haya traído consigo para con la demandante en el desarrollo de sus actividades diarias, placenteras y cotidianas, o cualquier otro tipo de documentación que permita establecer la naturaleza y gravedad de la lesión de manera objetiva y fundamentada y que de soporte a la suma pretendida por el accionante. En este contexto, la solicitud realizada se percibe como meramente especulativa y es bastante superior a los montos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de muerte o invalidez. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperar la pretensión por concepto de dolo a la vida de relación del extremo actor, y por lo tanto deberá negarse.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.3) DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”: ME OPONGO

a esta pretensión condenatoria, toda vez que la parte demandante no acredita la expectativa cierta con la que contaba de forma previa al accidente y la cual fuere truncada a razón de este. Así, no se explica cuál es la supuesta oportunidad que han perdido los demandantes y mucho menos aporta alguna prueba tendiente a demostrar la configuración de este perjuicio. Así, se tiene que olvidar la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente. En todo caso, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa; sin embargo, en el caso que nos ocupa, brillan por su ausencia los medios de prueba que acrediten este asunto. Con todo, se limita la parte actora a anunciar la supuesta causación del perjuicio, omitiendo el cumplimiento de la carga procesal, según la cual debe acreditar la presencia de los supuestos fácticos y jurídicos necesarios que hagan viable el reconocimiento de la supuesta pérdida de oportunidad, que, desde luego, es inexistente en el presente asunto.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.3 DAÑO A BIENES JURÍDICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”: ME OPONGO a esta pretensión condenatoria por concepto de daño a la salud, porque: i) se trata de una tipología de perjuicio que nunca ha sido reconocida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (1922-2021); ii) este perjuicio solo es reconocido por el Consejo

de Estado, no obstante, el órgano de cierre en esta jurisdicción es la Corte Suprema de Justicia; y
iii) la Corte Suprema de Justicia, reconoce es el daño a la vida en relación y no el daño a la salud, por lo cual al reconocer el mismo junto con el daño a la vida en relación (que ya fue solicitado) se estaría incurriendo en una doble indemnización.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.5) INTERESES DE MORA”: ME OPONGO a esta pretensión condenatoria, ya que a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir los presuntos daños producto del accidente del 27 de enero de 2021 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la notificación del auto admisorio de la demanda, desde la solicitud extrajudicial para obtener una indemnización, o desde que presentó la misma. Lo anterior, pues en sentencia SC1947 del 26 de mayo de 2021, se estableció que solo puede tenerse certeza del cumplimiento de estas cargas, a partir del momento en que queda ejecutoriada la sentencia que declara la responsabilidad del demandado. Del mismo modo, se debe reseñar que en el presente proceso no se puede acumular las pretensiones de intereses de mora con indexación, pues en últimas su efecto es el mismo. Por lo que acceder al reconocimiento de la misma devendría en un doble reconocimiento en favor del demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6) CONDENA DE INTERESES MORATORIOS A TODOS LOS DEMANDADOS”: ME OPONGO debido a que no se acredita la existencia de responsabilidad civil extracontractual en contra de los demandados, motivo por el cual no existe obligación de indemnización y, consecuentemente, no existe obligación pendiente que genere intereses moratorios, reiterando que estos únicamente nacen cuando se encuentre en firme la decisión del despacho a través de sentencia judicial, no antes. Del mismo modo, se debe reseñar que en el presente proceso no se puede acumular las pretensiones de intereses de mora con indexación, pues en últimas su efecto es el mismo. Por lo que acceder al reconocimiento de la misma devendría en un doble reconocimiento en favor del demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.7) COSTAS Y AGENCIAS DEL DERECHO”: ME OPONGO a que se condene en costas procesales a la parte pasiva del litigio, habida cuenta de la inexistencia de responsabilidad de los demandados y consecuentemente, de su obligación indemnizatoria. De modo que, teniendo que despacharse desfavorablemente las pretensiones del extremo actor, tampoco puede haber lugar a una condena por este concepto. Por lo expuesto la pretensión deberá ser negada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.8) INDEXACIÓN”: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues habida cuenta que no se logra estructurar una responsabilidad civil como la pretendida no hay lugar a que se dé la indexación y/o actualización de suma alguna a favor de la

parte demandante. Del mismo modo, se debe reseñar que en el presente proceso no se puede acumular las pretensiones de intereses de mora con indexación, pues en últimas su efecto es el mismo. Por lo que acceder al reconocimiento de la misma devendría en un doble reconocimiento en favor del demandante.

OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

El juramento estimatorio se objeta teniendo en cuenta que los valores referidos en el mismo deben ser estimados de forma razonada, sin embargo, en el acápite mencionado la parte demandante se limita a referir sumas de dinero sin indicar de dónde se extraen las mismas y sin que obre pruebas de dónde obtiene el monto base de la liquidación por concepto de lucro cesante señalado en el juramento estimatorio.

Debe recordarse que incluso desde los mismos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia¹ el perjuicio de lucro cesante solo puede ser reconocido en tanto el mismo se encuentre debidamente probado. Para el caso concreto, no existe prueba alguna de los ingresos percibidos por la víctima al momento del accidente, de dónde provenían dichos ingresos, y respecto de la disminución en la capacidad laboral de la demandante, es notoria la discrepancia entre el porcentaje de 45% que se usó para realizar la liquidación de este perjuicio y el porcentaje de PCL de 30.65% que fue determinado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, siendo este motivo suficiente para percibir como infundada esta pretensión, y por tanto diáfano resulta concluir que , carecen de sustento las afirmaciones realizadas en el escrito de la demanda.

En efecto, se verifica que el juramento estimatorio toma como base un ingreso mensual de \$1.160.000, lo cual de por sí ya implica un error técnico, pues para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, para el 27 de enero de 2021, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente era de \$908.256, a esto debe añadirse que no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su “existencia” a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente al factor prestacional teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de registro en el sistema de seguridad social, tampoco se acreditó la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto. Por lo tanto, no encuentra justificación alguna el hecho de que la parte demandante adicione al supuesto salario devengado el valor del 25% correspondiente a prestaciones sociales para derivar de ahí el supuesto perjuicio reclamado.

Por otra parte, el lucro cesante solicitado en la demanda se liquida con base en una supuesta PCL equivalente al 45%, no obstante lo anterior, el dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral del cual

¹ sentencias SC16690 de 2016 y SC11575-2015 del 05 de mayo de 2015

fue objeto la demandante y que fue elaborado por la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, determinó una disminución en la capacidad laboral de la accionante de un 30.65%, es decir, dos terceras parte de los “estimado” para efecto de tazar el lucro cesante, , por lo que puede afirmarse entonces que el cálculo realizado en la demanda se basó en meras especulaciones, contrariando así los parámetros señalados en la jurisprudencia. Sería ilógico e irrazonable reconocer las pretensiones a título de lucro cesante tal y como fueron solicitadas en la demanda, cuando de un lado no existe certeza sobre los ingresos que presuntamente percibía la demandante para la fecha de los hechos y, por el otro, la demandante fue calificada con una disminución de la capacidad laboral notoriamente menor a la empleada para calcular estos perjuicios y que estaría relacionada en gran medida con un accidente de tránsito ocurrido en el año 2005, es decir, mucho tiempo antes que el accidente que nos convoca a este proceso.

Por lo anterior los montos referidos en este acápite no podrán tenerse como prueba del lucro cesante supuestamente causado.

EXCEPCIONES DE LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA Y LOS PERJUICIOS ALEGADOS

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A LA PARTE DEMANDADA DEBIDO AL HECHO DE UN TERCERO: DEL SEÑOR YOHAN GABRIEL CUERVO CUERVO COMO CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA DE PLACA UGP67E

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar que, en el referido caso, se presentó un eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero, pues, la ocurrencia del accidente de tránsito del 27 de enero del 2021, se generó por la conducta única y exclusiva del señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, conductor de la motocicleta de placa UGP-67E, en la cual se movilizaba la demandante Ana Arenas como parrillera, pues resultó ser este quien ocasionó la colisión. Ello por cuanto de acuerdo con el informe Policial de Accidente de Tránsito, consagra como hipótesis del accidente la 112 y establece “*no respetó señal de tránsito “PARE”* para el conductor del vehículo UGP-67E. En ese orden de ideas, la configuración y aplicación de esta causal exonerativa de

responsabilidad tiene por efecto la imposibilidad de imputación del daño a al extremo pasivo de la Litis; y por contera, deben negarse las pretensiones de la demanda.

Recordemos entonces qué se tiene establecido normativa y jurisprudencialmente al respecto, con el fin de respaldar la presente excepción. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se analizó este concepto y se explicaron de manera clara los requisitos para su operancia, así:

“(...) a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de este último;

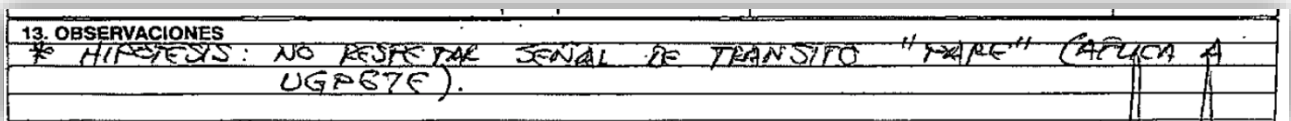
b) También es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para eliminar el riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producción del daño tuvo injerencia causal un elemento extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneración posible mientras no suministre prueba concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad;

c) Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan solo, que es únicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios coautores que a ella les son extraños, esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado este consagrado por el artículo 2344 del Código Civil que, por sabido se tiene y así lo recuerda con acierto el recurrente en varios apartes de su demandada de casación, hace parte tal disposición de un sistema normativo que en sus lineamientos fundamentales la Corte tiene definido en los siguientes términos: “...Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de los responsables, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguiente (...). Siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte

demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos ... (G.J. Ts. CLV primera parte, pág. 150 y CLXV, pág. 267, entre otras) (...)" (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 8/92. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

Jurisprudencialmente se han establecido tres (3) requisitos inexorables para que se configure la exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero: 1. Que el obrar del tercero sea ajeno al comportamiento de quien causó el daño, 2. Que sea un hecho imprevisible e inevitable y 3. Que ese hecho sea el que efectivamente causó el daño.

Para el caso concreto es evidente que se configura a todas luces el eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero. Lo anterior por cuanto concurren los tres (3) requisitos antes vistos para que sea declarado así: En primer lugar, se debe advertir que el bosquejo topográfico del IPAT y la información allí consignada permite colegir que el señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, no respetó la señalización de "PARE" que se encontraba en su carril. Obsérvese el siguiente extracto del IPAT:



- **Irresistibilidad.**

Es relevante destacar que, para el conductor del vehículo de placas UBX-418, resultaba imposible resistir la acción desplegada por el señor Yohan Cuervo, quien, como conductor de la motocicleta de placas UGP-67E, desobedeció la señal de tránsito. En este contexto, debe entenderse que el conductor del vehículo UBX-418, Omar Tenorio, no tenía la capacidad de controlar las acciones de otros conductores, y la invasión del carril por parte del señor Cuervo constituye una circunstancia ajena a su control, configurando una conducta irresistible para él.

- **Imprevisibilidad**

En segundo lugar, es necesario señalar que para el conductor del automóvil era totalmente imposible prever que en el lugar donde ocurrió el accidente se presentaría una conducta como la omitir y desobedecer la señal de tránsito "PARE". Dicho de otra forma, el conductor del vehículo de placas UBX-418, basado en las reglas de la experiencia y la buena fe, confió en que en la vía todos los conductores respetarían las normas y señales de tránsito. Por esta razón, resultó totalmente imprevisible que, para el momento del accidente, el señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo no respetara las señales de tránsito, supuesto que se acredita en el IPAT y en el bosquejo topográfico.

- **Emana de un tercero totalmente ajeno**

Como es evidente, el acto de invadir el carril contrario correspondió a un tercero que nada tiene que ver con el conductor, ni con el propietario del vehículo de placas UBX-418. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control del conductor del automóvil de placas UBX-418.

Por otro lado, debe tenerse presente que aun que la parte actora afirma que el señor Omar Rodrigo Tenorio conducía a exceso de velocidad, y no respetó la prelación vial de la motociclista y conducía con imprudencia e impericia, no hay una sola prueba de ello, toda vez que: **(i)** el exceso de velocidad requiere prueba técnica y si bien dentro del presente asunto se aportó un dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito con el cual pretense darse sustento a esta alegación infundada, llama fuertemente la atención que en dicho dictamen se realice el calculo de la velocidad de los vehículos involucrados a partir de una “simulación computacional”, que curiosamente indicó que la motocicleta se desplazaba justo a la velocidad permitida, mientras que el vehículo lo doblaba en velocidad, afirmación que no se basó en ningún cálculo de tipo físico o matemático que verdaderamente pueda brindar certeza al Despacho sobre lo ocurrido; **(ii)** no hay prueba de que el señor Tenorio Trujillo haya omitido prelación vial; **(iii)** no se ha constatado una conducta imprudente que haya ocasionado la colisión, contrario a la parte demandante y al conductor de la motocicleta de placa UGP-67E donde en el IPAT se establece que fue este último quien desobedeció las normas de tránsito al no respetar la señalización de “PARE”. Es decir, queda en evidencia la infracción de las normas de tránsito fue en cabeza del conductor de la motocicleta en donde se desplazaba la señora Ana Carolina Arenas Ramírez.

Dicho de otro modo, si el conductor del vehículo de placa UGP-67E no hubiera desobedecido las normas de tránsito establecidas, respecto de obedecer la señalización de PARE, es más que claro que nunca hubiera ocurrido el accidente de tránsito del 27 de enero del 2021, y junto con ello, nunca se hubiera presentado las lesiones personales a la hoy demandante Ana Arenas.

En conclusión, es evidente que los presuntos perjuicios aquí reclamados con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 27 de enero del 2021 fueron causados por el conductor del vehículo de placas UGP-67E, por cuanto su actuar negligente e imprudente fue el que puso en riesgo y peligro la vida de la hoy demandante Ana Arenas, comoquiera que este conducía de manera imprudente y negligente, desobedeciendo las señales de tránsito

Por todo lo anterior, ruego de declare probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR NO ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

Se formula el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora por cuando la

incidencia de la conducta del señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo en el accidente de tránsito del 27 de enero de 2021, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por las demandantes, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil. Pero sobre todo porque no existe una sola prueba que pueda acreditar que el señor Omar Rodrigo Tenorio infringió las normas de tránsito, o que haya desplegado acción alguna que se torne en la consecuencia directa del accidente. Por lo anterior, no se probó el nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el señor Omar Rodrigo Tenorio como conductor del vehículo de placa UBX418 y el daño deprecado por el extremo actor, y de tal suerte, las pretensiones deben ser negadas.

La relación de causalidad es un requisito sine qua non para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas.

El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia². En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

“(...) Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil (...)”³

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa eficiente del daño, **“la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo, (...) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...)”³**

Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o,

² Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que se posible declarar responsabilidad civil extracontractual es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(…) En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible. [...]⁴

En el presente caso, la parte demandante sostiene que el conductor del vehículo de placas UBX-418 actuó de manera imprudente e imperita, afirmando que no respetó la prelación vial y circulaba en exceso de velocidad. Sin embargo, tales alegaciones carecen de sustento probatorio dentro del expediente. Por el contrario, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer que lo que efectivamente se ha demostrado es la existencia de un hecho de un tercero, lo cual rompe el nexo de causalidad en este caso. Es decir, el accidente del 27 de enero de 2021 fue causado por el conductor del vehículo de placas UGP-67E, quien actuó de manera imprudente y negligente al desobedecer las señales de tránsito, específicamente al no realizar el debido PARE.

.Es importante resaltar del Dictamen de Reconstrucción de Accidente de Tránsito que, aun cuando con el mismo se pretense acreditar el nexo de causalidad entre la conducta del conductor del vehículo de placas UBX-417, en el acápite de evitabilidad se concluyó que el hecho dañoso pudo haber sido evitado si el vehículo #1, es decir, la motocicleta, se hubiera detenido antes de llegar al punto de colisión. No obstante, a las voces del Informe Policial de Accidente de Tránsito levantado por autoridad competente, y del “vídeo” de simulación del accidente que se aportó, es claro que la motocicleta omitió la señal reglamentaria de “PARE”, actuando de esta manera de manera imprudente y negligente, poniéndose a sí mismos y a los demás actores viales en un grave riesgo de que ocurriera un hecho lamentable como el que finalmente acaeció.

En conclusión, para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados y consecuentemente, a Mapfre

⁴ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

Seguros Generales de Colombia S.A., en razón a que no están acreditados el nexo de causalidad entre la conducta del vehículo UBX-418 y el daño sufrido por la demandante, pues las pruebas allegadas al expediente constatan que el accidente del 27 de enero de 2021, fue causado por el actuar imprudente y asaz del conductor del vehículo UGP-67E. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Solicito a señor Juez declarar probada esta excepción.

3. ANULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA ANTE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS

Si bien en el presente caso no se encuentra probada responsabilidad del conductor del vehículo de placas UBX418 frente a la ocurrencia del accidente de tránsito como arbitrariamente aduce la parte demandante. Ahora bien, en caso de que en el curso del proceso se acredite la existencia de tal circunstancia, de manera subsidiaria y sin que lo aquí expuesto pueda entenderse como un declaración de responsabilidad, el Despacho deberá tomar en consideración que el caso concreto debe analizarse a la luz del régimen de culpa probada, habida cuenta que corresponde al extremo actor probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la anulación de la presunción de culpa por la concurrencia de actividades peligrosas. Lo anterior por cuanto ambos conductores desempeñaban una actividad peligrosa, pues previo a la colisión, los dos vehículos se hallaban en marcha.

Siendo así, en la misma línea de la concurrencia de culpas, es de común conocimiento que, cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas. En efecto, ha dicho la jurisprudencia en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009 lo siguiente:

“explicó la sala, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”⁵.

Es decir que, el Juez debe analizar la conducta de todos los intervinientes, víctimas o no, para así verificar si su comportamiento tiene incidencia en la ocurrencia de los hechos. Así mismo la Corte sostuvo que *“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”*. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y

⁵ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009. Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.

también sin ésta.

Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, entre otros, y, el otro, incurrir en similares comportamientos. En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que ésta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla. La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio. No es que se valore la culpa o el dolo en cuanto tales, ni en consideración al factor subjetivo, sino la conducta en si misma dentro del contexto del ejercicio de una actividad peligrosa según el marco de circunstancias fácticas y los elementos probatorios.

Así las cosas, el régimen aplicable al tratarse de actividades peligrosas, no enmarca siempre una acción maliciosa y voluntaria, por el contrario, pueden ocurrir fruto de coincidencias o algún tipo de contingencia que suelen pasar con frecuencia, por tanto no es procedente imputar responsabilidad por el simple hecho de ejercer una actividad peligrosa, sino que debe hacerse un análisis exhaustivo de los elementos que pueden tener algún tipo de inferencia en la ocurrencia, así mismo sostiene la Honorable Corte Suprema de Justicia que

“La supuesta presunción de culpa por el mero ejercicio de una actividad peligrosa, carece de todo fundamento lógico y normativo. Legal, porque ninguna parte del artículo 2356 del Código Civil, siquiera menciona presunción alguna. Lógico, porque cualquier actividad humana, y en especial, la peligrosa, puede desplegarse con absoluta diligencia o cuidado, o sea, sin culpa y también incurriéndose en ésta. De suyo, tal presunción contradice elementales pautas de experiencia y sentido común, al no ajustarse a la razón presumir una culpa con el simple ejercicio de una actividad que de ordinario como impone la razón se desarrolla con diligencia, prudencia y cuidado”.

La doctrina ha sido clara en establecer que la colisión de actividades peligrosas se presenta cuando el daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras.

Así las cosas, en el presente caso nos encontraríamos frente a la responsabilidad con culpa probada prevista en el artículo 2341 del Código Civil, tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los fallos, cuyos apartes cito a continuación:

“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y tractocamión que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino el 2341 de culpa probada.”⁶

“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 del ibidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.”⁷

“[...] actividad desplegada por las partes de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quien se le demuestre una culpa efectiva.

(...)

La presunción de culpa, ninguna utilidad normativa o probatoria comporta al damnificado, tampoco es regla de equidad y menos de justicia, pues su único efecto jurídico es eximir de la probanza de un supuesto fáctico por completo ajeno al precepto, no menester para estructurar la responsabilidad, ni cuya probanza contraria es admisible, cuando toda presunción, salvo la iuris et de iuris que exige texto legal expreso, es susceptible de infirmar con la demostración de la diligencia y cuidado. Por tanto el juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, a cuyo efecto, imputado a la actividad de una sola parte, ésta es responsable por completo de su reparación y si lo fuere a ambas, cada una lo será en la medida de su contribución. En otros términos, cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad; contrario sensu, siéndolo la ejercida por la víctima, ninguna responsabilidad tendrá; y, si aconteciere por ambas actividades, la del agente y la de la víctima, como concausa, según su participación o contribución en la secuencia causal del daño, se establecerá el grado de responsabilidad que le asiste y habrá lugar a la dosificación o reducción del quantum indemnizatorio”⁸

⁶ Corte Suprema de Justicia Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001. MP Silvio Fernando Trejos Bueno.

⁷ Corte Suprema de Justicia Sentencia 5462 de 2000 MP José Fernando Ramírez Gómez.

⁸ Corte Suprema de Justicia Sentencia 3001 de 31 de enero de 2005 MP Pedro Octavio Munar Cadena.

Entonces para fundamentar un proceso de responsabilidad civil, no basta con solicitar una imputación objetiva entre el resultado y el acto causal, se requiere que el acto sea negligente o imprudente, y lo será aquél que infringe el deber de cuidado objetivamente exigible en la relación de la actividad peligrosa, para el caso, este deber de cuidado viene determinado por reglas especiales de tránsito y circulación de vehículos automotores.

En conclusión, tal como se desprende de la narración de los hechos de la demanda, ambas partes estaba en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la conducción de un vehículo automotor. Por tanto, concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas y en tal supuesto, se aniquilan mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del conductor del vehículo asegurado.

Por lo que respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción.

4. SUBSIDIARIA - REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN EN AL MENOS EL 90% EN ATENCIÓN A UNA EVENTUAL CONCURRENCIA DE CULPAS

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, en virtud de las cuales es evidente que no existe obligación indemnizatoria de la pasiva, por no configurarse su responsabilidad civil por el hecho de un tercero, en gracia de discusión, si hipotéticamente se considerara que el conductor del vehículo UBX-418 desplegó una conducta imprudente, lo cierto es que de todos modos es evidente la incidencia del conductor del vehículo UBG-67E en los hechos y su participación determinante en la ocurrencia del evento. En razón a lo anterior, se adjunta escrito en donde se llama en garantía al señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, para que este pueda responder por su incidencia absoluta en el hecho lesivo.

Como primera medida, es menester recordar que la conducta positiva de un tercero en la ocurrencia del hecho, puede tener incidencia relevante al momento de realizar el examen de la responsabilidad civil. En este sentido, su comportamiento puede corresponder a una condición del daño acaecido. En ese orden de ideas, la problemática de la concurrencia de culpas se resuelve en el campo objetivo de las conductas entre los conductores involucrados en el accidente, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del daño. Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma en que se generó el daño y quién incrementó o disminuyó el riesgo

En este sentido, debe determinarse si la actuación de quien sufrió el daño fue o no determinante, o se constituyó en motivo exclusivo o concurrente de su mismo padecer. En esta medida, al momento de realizar el análisis sobre la causa del daño, el juzgador debe establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia del comportamiento desplegado por cada parte alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación pecuniaria. En tal razón, el señor Yohan Gabriel

Cuervo Cuervo será llamado en garantía en este proceso, puesto que, del bosquejo topográfico del IPAT y la información allí consignada permite colegir que el señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, no respetó la señalización de “PARE” que se encontraba en su carril, por lo que la configuración del accidente se debió al actuar azas y negligente del conductor del vehículo UGP-67E.

Expuesto lo anterior, y considerando que en este caso en particular corresponde al demandante probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la presunción por la concurrencia de actividades peligrosas, es evidente que dentro del plenario no se dispone de pruebas que demuestren de manera concluyente la existencia de una conexión causal entre las acciones de los demandados y el daño alegado, y especialmente considerando que dentro del expediente es claro que la desatención de las normas de tránsito por parte del señor Yohan Cuervo, resultaron definitivas para la provocación del daño, resulta evidente que se debe eximir de toda responsabilidad a la parte demandada, o en su defecto, disminuir el monto de indemnización en vista de la participación de un tercero en el acaecimiento de los hechos.

.Como ya se indicó, al momento de decidirse el fondo del presente asunto no puede perderse de vista que, el Informe Policial de Accidente de Tránsito incluye una hipótesis únicamente respecto de la motocicleta que es por esta haber omitido la señal reglamentaria de “PARE”, tal y como se señaló líneas atrás en el presente pronunciamiento. Así mismo, véase como en el Dictamen de Reconstrucción de Accidente de Tránsito allegado al proceso por la misma parte demandante, en su análisis de evitabilidad del hecho de tránsito, se indicó que si el vehículo #1, es decir, la motocicleta en la cual se transportaba la demandante como pasajera, se hubiera detenido antes del punto de colisión (en el PARE), el hecho se hubiera evitado, lo cual puede verse ejemplificado en el “vídeo” de simulación que se aportó.

En consecuencia, el vehículo #1 se hubiera detenido antes del punto de colisión y el hecho se hubiera evitado.

En conclusión, este honorable despacho debe considerar tan siquiera la concurrencia de culpas en un porcentaje de al menos el noventa por ciento (90%), pues el actuar por parte del señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo, quien es llamado en garantía a este proceso por mi mandante, resultaron definitivas para la provocación del daño. Así, en el remoto e hipotético caso que mi representada esta llamada a efectuar algún tipo de indemnización deberá la misma verse reducida conforme al porcentaje de participación del señor Yohan Cuervo, tercero que será llamado en garantía, en la ocurrencia del accidente.

5. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANERA SOLIDARIA EN CABEZA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. no puede ser considerada como responsable de la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna, máxime en atención a que su relación con el vehículo de placa UBX-418 para el momento de ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad. Es decir, ni el conductor del vehículo era dependiente de la aseguradora, ni aquella ostentaba la propiedad de dicho automotor, por ende no puede imponerse una obligación solidaria, pues lo cierto es que su relación se ciñe a los estrictos términos del contrato de seguro.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación, de igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el artículo 2344 del Código Civil si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, sin embargo, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia⁹ la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, no obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte¹⁰ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“(…) La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a

⁹ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁰ Ibídem.

los sujetos activos de la relación jurídica.

Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (...)”

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la Póliza de Automóviles No. 1501120012387, entre mi procurada y el tomador no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada, lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante.

Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del supuesto accidente de tránsito presuntamente acaecido el 27 de enero de 2021, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad. Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

EXCEPCIONES FRENTE A LOS PERJUICIOS INVOCADOS EN LA DEMANDA

6. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO DENOMINADO LUCRO CESANTE EN FAVOR DE LA SEÑORA ANA CAROLINA ARENAS RAMÍREZ

El lucro cesante entendido como una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario comporta la afectación patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso dejado de percibir con ocasión al hecho dañoso, pese a ello, el mismo debe ser cierto y real, situaciones que en este caso concreto no se cumplen y por ende no se puede reconocer ninguna suma por este concepto, además porque (i) no se ha demostrado que la señora Ana Carolina Arenas hubiera desarrollado alguna actividad laboral; (ii) aun cuando en el plenario obra un dictamen de pérdida de la capacidad laboral de la demandante emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, allí puede observarse una disminución en la capacidad laboral de la demandante de un 30.65%, es decir, dos terceras partes del 45% que “estimó” la parte demandante a efectos de realizar la liquidación de esto perjuicios, pero además, téngase en cuenta que tanto en dicho dictamen como incluso en los informes periciales de clínica forense se tiene como de gran

relevancia el antecedente de la demandante por el accidente de tránsito del cual fue participe en el año 2005 y el cual le ocasionó entre otras lesiones una fractura de fémur; y (iii) como la activa no demostró que la señora Arenas Ramírez tuviera un vínculo laboral, es claro que no puede liquidarse el lucro cesante con un incremento del 25% según dice la activa como factor prestacional, y en todo caso dicho porcentaje solo procede en caso de muerte, que no es el caso. En este orden de ideas, el reconocimiento del lucro cesante solicitado no es procedente y por lo tanto deberá ser negado.

Para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es decir que si no se hubiese producido el daño el ingreso debía percibirse, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(...) El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(...) perjuicio que el daño ocasionó (...).

Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, “(...) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)¹¹

Así mismo, en Sentencia del 24 de junio de 2008, la misma corporación afirmó que:

*“(...) en cuanto perjuicio, el **lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos,** v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (...)*

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinsa en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de junio de 2018. Expediente SC 2107-2018.

patrimonio fatal o muy probablemente (...)

Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (...)¹² (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Esto significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso, siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual **toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo**, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo se reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

“(…) La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como *el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto.* (...)

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener

¹² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 2008. Radicado 2000-01121-01.

un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante (...)” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. Por lo anterior, no es jurídicamente viable presumir los ingresos de una persona puesto que ello vulnera significativamente el carácter cierto del perjuicio. Por cuanto, los perjuicios materiales solicitados al Despacho deben estar debidamente soportados y no puede partirse de una presunción, sino que debe mediar la acreditación de la certeza.

Así las cosas y dejando claro que en el presente asunto es improcedente el reconocimiento del lucro cesante solicitado por la parte Demandante, puesto que es claro que la demandante no recibía ningún ingreso, según las pruebas que obran en el expediente. Por lo demás, en el caso concreto, la parte demandante no ha demostrado la PCL que dé cuenta que la víctima directa dejó de percibir ingreso alguno debido al accidente de tránsito. En tal sentido, si se llegare a reconocer emolumento alguno por concepto de lucro cesante, claramente se transgrediría el carácter cierto del perjuicio.

En efecto, al verificar el escrito de la demanda la parte actora manifiesta que al momento del supuesto accidente de tránsito la señora Ana Carolina Arenas tenía 32 años de edad y contaba con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo, sin embargo, no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su “existencia” a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente a las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incertidumbre de la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto.

Por otra parte, el lucro cesante solicitado en la demanda se liquida con base en una supuesta PCL equivalente al 45%, la cual a la luz de las pruebas que obran en el plenario es infundada pues si se observa el dictamen de pérdida de capacidad laboral que fue aportado por la misma activa, allí se ve una pérdida de capacidad laboral del 30.65%, es decir, manifiestamente menor, por lo que el cálculo realizado por la parte demandante se basa en meras especulaciones contrariando los parámetros señalados en la jurisprudencia.

De esta forma, la inexistencia de las pruebas conducentes para demostrar la causación de este perjuicio es evidente porque: (i) no se allega prueba alguna que acredite que la señora Diana González se encontraba laborando al momento del accidente; (ii) no existe prueba alguna que acredite el ingreso percibido por la víctima al momento del accidente, y; (iii) aunque existe un dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, en este se toma como un antecedente de gran relevancia el accidente de tránsito ocurrido en el año 2005 en el cual también se vio involucrada la demandante y que le causó entre otras lesiones una fractura del fémur, antecedente para nada menor en tratándose de las lesiones que ahora reporta sufrir la parte demandante consecuencia del hecho ocurrido el 27 de enero de 2021. No puede descartarse entonces que la gravedad de cualquier lesión que hubiere sufrido la señora Ana Carolina Arenas como consecuencia de los hechos materia de litigio se haya visto exacerbada por ese antecedente que incluso es mencionado en múltiples ocasiones en los informes periciales de clínica forense elaborado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal . Por lo tanto, es imposible reconocer el perjuicio reclamado pues carece de todo sustento, lo que evidencia que la parte demandante no cumplió la carga impuesta en el artículo 167 del Código General del Proceso y en la jurisprudencia.

Por lo anterior solicito al señor juez declarar probada esta excepción.

7. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES

Se propone la presente excepción toda vez que el demandante pretende una cuantiosa indemnización con ocasión de unos supuestos perjuicios extrapatrimoniales derivados del accidente de tránsito ocurrido el 27 de enero de 2021, sin que se halle acreditada la materialización de tales perjuicios y desconociendo los rubros tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia. Incluso, realiza una tasación que excede lo que la Corte ha reconocido en caso de muerte e invalidez, lo cual no ocurrió en este caso.

Si bien es cierto que no existen criterios objetivos de aplicación mecánica respecto a la cuantificación de los daños morales, cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos. Lo

anterior, además de que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium judicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, de todas maneras, deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien los pretende. Teniendo en cuenta adicionalmente, que este tipo de perjuicios “*se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables*”¹³.

Ha señalado igualmente la Corte¹⁴ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona “*es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital*”. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, “*ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario*”.

Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su Jurisprudencia ha establecido unos parámetros para la cuantificación de este. No obstante, desatendiendo a dichos parámetros, el apoderado de la parte demandante solicita se realice el pago del equivalente a 60 SMLMV a cada uno de los demandantes

Se destaca que no existe ningún elemento probatorio que acredite la gravedad de la lesión sufrida por el demandante, pues aún cuando se allegó al despacho un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, este arrojó un resultado notoriamente menor al porcentaje que sin fundamento alguno empleó la parte demandante para estimar estas pretensiones, así mismo la PCL no fue causada en estricto sentido por el accidente de tránsito ocurrido el 27 de enero de 2021, sino que cuenta la demandante con un antecedente de una fractura de fémur que sufrió a consecuencia de otro accidente de tránsito en el cual se vio involucrada en el año 2005 . Sumado a que no obra prueba que permita estimar los ingresos que presuntamente percibía Ana Carolina Arenas para la fecha de los hechos, o si en efecto percibía ingreso alguno.

A continuación relacionamos algunas condenas emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por concepto de “daño moral”¹⁵:

- a. El valor máximo reconocido, para el evento **muerte** a familiares en primer grado, por la CSJ (2016)¹⁶, es de **\$60 millones**; lo reiteró en 2017¹⁷. Se aclara sí que la misma CSJ tiene dicho

¹³ Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327-01

¹⁴ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00.

¹⁵ Cfr. TSDJ. De Pereira. Sentencia de segundo grado. Rad. 05001-31-03-005-2005-00142-01. MG. Sustanciador Duberney Grisales Herrera (en descongestión).

¹⁶ CSJ, SC-13925-2016.

¹⁷ CSJ, SC-13925-2016.

que en tratándose de perjuicios de esta estirpe, no existen topes máximos y mínimos¹⁸.

- b. La CSJ el día 06-05-2016¹⁹, ordenó pagar **\$15 millones** por esta especie de daño a la víctima directa, cuyas lesiones fueron: perturbación psíquica permanente y deformación física en el cuerpo de carácter permanente con la colocación de una válvula de drenaje en el cerebro; al momento del accidente contaba con 17 años.
- c. Y en la sentencia SC-21828-2017²⁰, la CSJ condenó por este rubro, a **\$40 millones** para la víctima directa, la afectación consistió **en la extracción del ojo izquierdo**, que le dejó como secuela alteración estética del rostro en forma permanente y, desde luego, mermó su capacidad visual.
- d. La CSJ en sentencia del 18-11-2019²¹, reconoció **\$10 millones** para una mujer que en accidente de tránsito sufrió trauma de tejidos blandos, de cadera y pelvis, traumatismo craneoencefálico, paresia de ojo derecho y depresión con una pérdida de capacidad laboral de **65.68%** dictaminada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Así, es evidente que la tasación del daño moral efectuada por el extremo actor en las pretensiones de la demanda (240 SMLMV), es a todas luces exorbitante y carece de cualquier sustento normativo y/o jurisprudencial. En ese sentido, es claro que la parte demandante está efectuando una petición que excede con creces los baremos máximos establecido por la jurisprudencia²², razón por la cual, la suma solicitada no puede ser reconocida, incluso, en el remoto evento en que se llegase a demostrar la presunta responsabilidad endilgada al extremo pasivo.

Ha señalado igualmente la Corte²³ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona *“es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital”*. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, *“ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario”*.

En conclusión, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, es claro como el extremo actor no solo no probó la configuración del presunto perjuicio moral del cual pretende su indemnización, sino que adicionalmente, sus estimaciones económicas son

¹⁸ CSJ, SC-21828-2017.

¹⁹ CSJ, SC-5885-2016.

²⁰ CSJ, SC-21828-2017

²¹ CSJ, SC-21828-2017

²² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia del 07 de marzo de 2019. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

²³ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00.

abiertamente indebidas e injustificadas de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Solicito declarar probada esta excepción y desestimar la cuantificación de perjuicios presentada por la parte demandante.

8. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ASÍ COMO SU CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA QUE PRETENDEN LOS DEMANDANTES

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, el reconocimiento del daño a la vida en relación, se da única y exclusivamente a la víctima directa de una lesión en razón al daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones. Además, no existe dentro del proceso ninguna prueba respecto de los ingresos percibidos o dejados de percibir por la señor Ana Carolina Arenas, y aunque si existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral, el porcentaje que este arrojó es considerablemente inferior al porcentaje “estimado” por la parte demandante para poder liquidar este rubro de pretensiones, a lo cual debe sumarse que, dentro de este dictamen así como en diferentes dictámenes periciales se incluye la fractura del fémur derecho que sufrió la demandante en el mes de diciembre del año 2005, por lo cual está en duda la relación causal entre el accidente ocurrido el 27 de enero de 2021 y la pérdida de capacidad laboral que sufre la demandante de clínica forense que allegan, se hace mención al importante antecedente de .

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida en relación, pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o

menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (...)*²⁴.

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con **la pérdida de la capacidad de locomoción permanente**, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera²⁵. Nótese que en dicho caso la víctima perdió su movilidad de forma definitiva, en cambio en el presente caso no. En otro penoso caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de \$ 30.000.000 a la víctima directa **por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**.

Obsérvese que, en los casos antes referidos, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se vislumbra un medio de prueba que, al menos sumariamente, permita acreditar que la demandante, Ana Carolina Arenas Ramírez presenta consecuencias permanentes en su

²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006-1997-09327-01.

²⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03-002-2009-00114-01.

corporeidad que afectaron directamente su estilo de vida, su plan de vida, su relación con los demás o consigo mismo, pues en este punto se resalta que si bien se aportó un dictamen de pérdida de capacidad laboral, este a su vez está acompañado de otras documentales, como por ejemplo dictámenes periciales de clínica forense en los cuales se da cuenta de un importante antecedente que tiene que ver con una lesión sufrida por la demandante en un accidente de tránsito que ocurrió en el año 2005, que le ocasionó una fractura en el fémur derecho, mismo que resultó afectado en el accidente ocurrido el 27 de enero de 2021, por lo cual más que una nueva lesión se trataría de un recaimiento en una lesión preexistente y por tanto, es dudosa la relación de causalidad entre los hechos objeto de litigio y la disminución en la capacidad laboral de la demandante, ello sin pasar por alto que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado por la respectiva junta es notoriamente al empleado por “estimado” por la parte demandante, por ende se concluyó que no existe tal dictamen, encontrando que no hay prueba cierta de las presuntas afectaciones.

En línea con lo anterior, debe resaltarse aquello se ha reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. **No obstante, el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa.** En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“(…) b) Daño a la vida de relación:

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)”²¹
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).²⁶

Además, también es menester señalar otros pronunciamientos de donde se extrae la inviabilidad de condenar al pago de esta tipología de perjuicio a favor de las víctimas indirectas, veamos:

Sentencia SC9193-2017²⁷:

b) Daño a la vida de relación:

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales.

²⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo.

²⁷ Sentencia SC9193-2017, Rad. 11001-31-03-039-2011-00108-01, 28 de junio de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

De las anteriores sentencias de la Corte Suprema emerge con claridad como el daño a la vida de relación no puede ser reconocido a personas distintas a la víctima directa del daño, esto es la joven Ana Carolina Arenas Ramírez por lo cual la situación que en el caso de marras se torna imposible dado que, dentro del escrito de la demanda, se solicita el reconocimiento del daño a la vida en relación, para todos los demandantes. Además, al margen de la improcedencia de reconocer esta tipología de perjuicios a las víctimas indirectas, lo cierto es que las sentencias antes aludidas incluso fijan parámetros a tener en cuenta para la procedencia el daño a la vida de relación, a fin de no confundirse con el daño moral, pues de lo contrario se indemnizaría dos veces un mismo perjuicio.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad, donde al expediente Aunque se aportó un dictamen de pérdida de capacidad laboral, este por sí solo no acredita que la lesión sufrida por la demandante la afecte en su cotidianidad, ni mucho menos que dicha afectación sea equivalente o proporcional a la estimación de las pretensiones que ha realizado la parte demandante. Por tanto se puede afirmar que se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal y que le haya evitado continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaba la demandante víctima directa antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

9. IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD QUE PRETENDEN LOS DEMANDANTES

Es improcedente el reconocimiento de una pérdida de oportunidad en este caso por cuanto que no se avizoran los elementos que jurisprudencialmente se han establecido para ello. Sobre este punto se destaca que la parte demandante no explica cuál es la supuesta oportunidad que han perdido los demandantes y mucho menos aporta alguna prueba tendiente a demostrar la configuración de este perjuicio. Sobre este punto, se advierte que la jurisprudencia establece la no procedencia de indemnizar una mera expectativa, sino que debe ser una pérdida del chance que debe estar acreditada de forma suficiente. Por lo cual, se denota el interés y el afán de lucro injustificado de la parte actora, al pretender sumas de dinero por perjuicios abiertamente improcedentes, cuyos presupuestos estructurantes no concurren de ninguna manera.

Es menester, traer a consideración el postulado de la H. Corte Suprema frente al tema en particular, en la sentencia SC5885-2016, expuso lo siguiente:

“(…) Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a: (i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización [...]; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que [...] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos (...).”

De lo anterior, es pertinente resaltar que “el chance” o la oportunidad debe ser verídico, real y actual, pues de considerar que la oportunidad dependería de un futuro, no se estaría sino, en la eventual e hipotética circunstancia de que el hecho ocurra o no, y que por ello no se puede establecer que el daño haya configurado tales oportunidades, ya que no se puede partir de supuestos que NO están ligados con la realidad y su probanza sería nula, por lo tanto la indemnización pretendida por ello, no tendría lugar alguna sobre la persona a la cual se le endilga el presunto daño.

Consecuentemente, se tiene que, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues se reitera que la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

10. IMPOSIBILIDAD DE RECONOCER PERJUICIOS A TÍTULO DE DAÑO A LA SALUD A FAVOR DE LA DEMANDANTE

En el presente caso no sólo es jurídicamente inadmisibles predicar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados por concepto de daño a la salud, sino que, además, tampoco es jurídicamente viable imponer condena alguna tendiente al pago por concepto de esta tipología de perjuicio, toda vez que el mismo en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil no constituye un daño resarcible, adicionalmente, desde la perspectiva de la jurisprudencia el daño a la salud es un

perjuicio que se fundamenta en el mismo tipo de daños resarcidos por el perjuicio denominado daño a la vida de relación, por lo que, en caso de una eventual condena, el acceder favorablemente a esta pretensión teniendo por acreditada la alteración a las condiciones de existencia, implicaría un doble resarcimiento por el mismo tipo de daños incurriendo en el enriquecimiento sin justa causa de la parte demandante.

Tal y como lo ha reconocido la Corte en la sentencia del 5 de agosto de 2014, que contiene la jurisprudencia más reciente de esa corporación respecto de la tipología y la reparación del daño inmaterial, se estableció lo siguiente:

“(…) De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional (…)”

Ahora bien, es claro que en virtud del principio iura novit curia el juzgador puede equipar el perjuicio reconocido por daño a la vida de relación al de daño a la salud, por lo que el hipotético reconocimiento del primero de estos perjuicios subsumiría el reconocimiento de daño a la salud pretendido por la parte actora, esto teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que se trata de un mismo perjuicio con diferentes denominaciones, a saber:

*“(…) En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; **ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico)**; iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en un proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación (…)”²⁸*

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, es claro que el Juzgador no puede reconocer a favor de la parte demandante este tipo de perjuicio pues de hacerlo otorgaría una suma económica por

²⁸ Sentencia del 4 de mayo de 2011, Sección Tercera del Consejo de Estado

cada concepto cuando su fundamento es el mismo, lo cual a todas luces es inviable.

Debe tenerse en cuenta que la parte actora sustenta el pedimento de este perjuicio en las mismas bases sobre las cuales solicita el reconocimiento del perjuicio por daño a la vida de relación, pues esa categoría implica la afectación psicofísica, es decir que en ella se incluyen las supuestas consecuencias derivadas de las lesiones producidas. Por lo que no es posible reconocer bajo un nombre distinto el mismo perjuicio.

Pero además nótese que la Corte Suprema de Justicia en sentencia **SC 562-2020**²⁹ equiparó en su titulación el daño a la vida de relación con el daño a la salud para reiterar que aquel corresponde al menoscabo a la integridad psicofísica:

b) Daño a la salud, a las condiciones de existencia o a la vida en relación.

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales.

Por cuanto las secuelas permanentes e irreversibles que sufrió la menor alteraron sus condiciones de existencia y su integridad psicofísica, de manera que no podrá disfrutar de la felicidad propia de los primeros años de infancia, ni mucho menos podrá realizar las actividades lúdicas y formativas que acostumbra hacer un niño que goza de buena salud, este rubro se tasaré en la suma de setenta millones de pesos (\$70'000.000).

Conforme al criterio de la Corte Suprema, es claro que el daño a la salud se traduce en alteraciones físicas que hacen parte del daño a la vida de relación porque encarnan el mismo fundamento. Luego es imposible pretender indemnizar una misma situación fáctica so pretexto de dos categorías distintas.

Adicionalmente a lo anterior, se puede extraer que la Corte Suprema de Justicia concretó el género de los perjuicios inmateriales mediante las siguientes especies: daño moral; daño a la vida de relación y el daño a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional. De lo anterior, resulta claro que el daño a la salud no es un perjuicio inmaterial reconocido en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil por la Corte Suprema de Justicia. Razón por la cual, **NO** es un perjuicio susceptible de ser valorado, como quiera que el presente asunto se tramita ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil y no ante la Jurisdicción de lo Contencioso

²⁹ Sentencia SC 562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01, 27 de febrero de 2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Administrativo.

Aunado a lo anterior, no es procedente reconocer esta categoría, toda vez que, el demandante no probó la supuesta alteración en sus condiciones de vida, conclusión que se puede señalar teniendo en cuenta que no obra en el expediente ninguna prueba que dé cuenta del supuesto cambio que las condiciones de vida de la parte actora sufrieron como consecuencia del accidente de tránsito, destacando que si bien la activa aportó al proceso un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, este arrojó un porcentaje de disminución en la capacidad laboral de la demandante notoriamente menor al que se “estimó” en la demanda, aunado a que, se tiene en cuenta un importante antecedente de la demandante, quien precisamente en el año 2005 también había sufrido una fractura del fémur derecho, mismo que resultó afectado en el hecho de tránsito ocurrido el día 27 de enero de 2021, por lo que resulta dudosa establecer una relación de causalidad entre este hecho y la pérdida de capacidad laboral de la demandante.

Corolario de lo anterior es que no solo no se encuentra demostrada la afectación psicofísica que influye en las condiciones de vida de la demandante Ana Carolina Arenas, sino que incluso bajo el supuesto de que dicha afectación se demuestre, no será posible derivar de la misma el reconocimiento del perjuicio denominado daño a la salud, ya que este no se encuentra reconocido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y, en todo caso, su reconocimiento implicaría un enriquecimiento sin justa causa a favor de la parte actora pues sus fundamentos guardan identidad con el reconocimiento del daño a la vida de relación.

Por lo anterior solicito declarar probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

11. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., DEBIDO A QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ART. 1077 DEL C. Co.

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no ha surgido obligación alguna en cabeza de mi representada debido a que no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque, en primer lugar, no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por la demandante, sumado a que se probó que estamos ante la configuración de las causales eximentes de responsabilidad relativas al hecho de un tercero. Aunado a ello, no se ha probado la cuantía de la pérdida, en la medida que las peticiones de lucro cesante son antitécnicas puesto que se pretende el reconocimiento de tal concepto derivado

presuntamente de una actividad laboral, así mismo hay una total orfandad probatoria, respecto de los presuntos daños morales, lucro cesante, daño a la vida en relación, daño a la salud y daño a la pérdida de oportunidad, estando dichas pretensiones tasadas de forma exorbitante. Por tal razón no se ha cumplido con lo exigido en el artículo 1077 del Código de Comercio originando así la improcedencia de la afectación de la Póliza de Automóviles No. 1501120012387.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto está suficientemente claro que el riesgo asegurado en la póliza es la responsabilidad en la que incurra el asegurado proveniente un accidente de tránsito y comoquiera que en este caso no obra prueba que demuestre que el accidente ocurrido el 27 de enero del 2021 se ocasionó como consecuencia de la conducta única del conductor del vehículo de placas UGP-67E, por lo que, es evidente que no se ha realizado el riesgo asegurado y en consecuencia no surge la obligación condicional del asegurador.

El artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“(...) ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (...) (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguratorio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”

“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., Art. 1080) (…)”³⁰ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (Art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida,

³⁰ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

si fuere el caso” (Art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (Art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (Art. 1089, ib.) (...)”³¹.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios (...)”³² (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte Demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del C. Co. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador.

A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

(i) La no realización del Riesgo Asegurado.

De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza de Automóviles No. 1501120012387, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Se aclara que, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi

³¹ Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.º 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

³² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501

procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza, esto es el Transportes Especializados Rodrigo Tenorio Rivera Ltda., o el conductor designado cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la Responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro, de la siguiente manera:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

3.1.1.1. Definición

La Compañía indemnizará, dentro de los límites previstos en la carátula, los perjuicios que cause el Asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra, según la definición legal, proveniente de un accidente o evento ocasionado por el vehículo descrito en la carátula de la póliza, conducido por el Asegurado o por la persona autorizada por éste, o cuando el vehículo se desplace sin conductor, del lugar donde ha sido estacionado por alguno de ellos.

Cuando el Asegurado sea persona natural, el presente amparo se extiende al manejo autorizado de otros vehículos por parte del Asegurado, siempre y cuando se trate de vehículos de similares características, clase y uso al descrito en la carátula de la póliza.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que: **(i)** No se prueba que el hecho generador del daño esté en cabeza del señor Omar Tenorio, conductor del vehículo asegurado; **(ii)** No existe nexo causal entre la conducción del vehículo de placas UBX-418 y los daños ocasionados a la señora Ana Arenas; y **(iii)** dentro del plenario obran varias pruebas que constan que el accidente se ocasionó en razón del actuar imprudente e impertinente del vehículo UGP-67E, configurándose entonces causal de exclusión denominada hecho de un tercero. Así, en el IPAT, se establece de manera explícita que el accidente tuvo lugar debido a la culpa del señor Yohan Cuervo, a raíz de desobedecer las señales de tránsito, pues no respetó la señalización de “PARE”. Como consecuencia de ello, no ha nacido la obligación condicional por parte de la aseguradora.

(ii) Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Puesto que las demandantes solicita el reconocimiento de lucro cesante, daño a la vida de relación, daño moral, pérdida de oportunidad Etc.; sin embargo, no se acredita por ningún medio de prueba fehaciente, conducente y pertinente que: (i) la señora Ana Carolina Arenas, estuviera ejerciendo una actividad laboral, no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; (ii) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demandante y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; (iii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; (iv) no se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido por la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, y; (v) no obra prueba alguna que dé cuenta de la pérdida de oportunidad reclamada. Por lo anterior, es claro que la parte demandante tampoco probó la cuantía de la pérdida.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida, que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida, no se encuentra probada, comoquiera que el lucro cesante, daño moral, daño a la vida en relación, pérdida de oportunidad y daño a la salud, solicitados son improcedentes, teniendo en cuenta que no existe prueba que acredite su causación con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 27 de enero de 2021. En ese entendido, debido al incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el Art. 1077 del C. Co. por la parte demandante, ello por cuanto se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

12. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES No. 1501120012387 OTORGADA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Sin perjuicio de las demás excepciones propuestas, y sin que con ello se esté comprometiendo a mi representada, en el improbable caso en que el Despacho considere que sí nace obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro de automóviles No. 1501120012387 se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del

negocio asegurativo.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”.

En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura.

Así sí mismo, es importante, tener en cuenta que de acuerdo a la causal 2.2.6 de las exclusiones de la póliza, el valor asegurado no cubre las prestaciones que deban ser pagadas por seguridad social, SOAT, FOSYGA, etc. Sobre el particular, el Contrato de Seguro establece:

2.2.6. Los perjuicios causados por el Asegurado o conductor autorizado que estén cubiertos por el SOAT, FOSYGA, compañías de medicina pre-pagada, EPS, ARP, ARS, fondos de pensiones o de otras entidades de seguridad social, además de la subrogación a que legalmente este facultada cualquiera de las entidades mencionadas con ocasión del cumplimiento de sus propias obligaciones legales y/o contractuales.

Esta indicación es reiterada más adelante nuevamente en el condicionado general, pues define que los límites pagados deben operar en exceso de los pagos realizados por FOSYGA, SOAT, etc. Veamos:

Los límites establecidos en la carátula de la póliza operan en exceso de los pagos correspondientes a incapacidad total o permanente, indemnizaciones por muerte, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios o funerarios, que estén cubiertos por el SOAT, FOSYGA, Medicina Pre pagada, EPS, ARL, ARS, Fondos de pensiones, o demás entidades de seguridad social.

En consecuencia, de hallarse configurada, según el acervo probatorio que obra dentro del proceso, además de las alegadas, alguna otra causal de exclusión consignada en las condiciones generales o particulares de las pólizas no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese sentido, ruego al Despacho que, una vez advertida la causal, se le dé aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses que le atañen a mi prohiljada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

13. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO

Comoquiera que no se encuentra acreditada la causación de perjuicio alguno en detrimento o afectación de la activa de la acción, no es dable la imposición de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, pues la póliza de seguro respecto a la cual se vincula a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., cuenta con un carácter meramente indemnizatorio. Lo que deviene en que la misma únicamente podrá afectarse dentro de los límites propios del resarcimiento de los perjuicios efectivamente acreditados. En este caso, los perjuicios invocados no se probaron puesto que: (i) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demandante y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; (ii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; (iii) no se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido por la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, y; (iv) no se encuentra acreditada la pérdida de oportunidad reclamada. De tal suerte no es posible el reconocimiento de dichos perjuicios pues de concederse, e imponerse la obligación de resarcimiento a mi prohiada, se estaría vulnerando el carácter meramente indemnizatorio del contrato de seguro que acá se vinculó.

Nuestro estatuto comercial privilegia y consagra la naturaleza del contrato de seguro como de naturaleza meramente indemnizatoria, determinando al respecto el artículo 1127 del Código de Comercio lo siguiente:

*“(…) Art. 1127.-Modificado por la Ley 45 de 1990, artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la **obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado** con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley **y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima**, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. (Subrayado y negrita, fuera del texto original). Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055 (...). (Subrayas y negrillas fuera del texto original)”*

En igual sentido, y originariamente la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido, según el fallo del 22 de julio de 1999, expediente 5065 en el que realizó la siguiente referencia,

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”³³ (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, en atención a que, de conformidad con el acervo probatorio que milita en el expediente no se acreditó la causación de ninguno de los perjuicios pretendidos por la demandante y en atención a que el contrato de seguro tiene como fin último la reparación, indemnización y/o compensación por los daños y perjuicios devenidos a partir de la configuración de un riesgo asegurado. En ese entendido, las pretensiones condenatorias incoadas por el extremo actor no pueden ser reconocidas debido a que no se encuentran adecuadamente probadas.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que se busca sean reconocidas están indebidamente cuantificadas por la orfandad probatoria. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes debido a que: (i) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demandante y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; (ii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente por las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; (iii) no se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido por la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, y; (iv) no se encuentra acreditada la pérdida de oportunidad reclamada. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

Por lo tanto, conceder estos perjuicios sin evidencia concreta no solo contravendría el principio indemnizatorio del contrato de seguros, sino que también generaría una violación al mismo al carecer de sustento fáctico, comprometiendo la integridad del proceso. En consideración a lo expuesto, se concluye que el reconocimiento de estos conceptos resulta inviable y contraproducente en el marco legal y contractual.

Consecuentemente, no es posible la imposición de obligación alguna en cabeza de mi procurada, pues ello devendría en un enriquecimiento sin justa causa que mi prohijada no se encuentra en la

³³ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 1999, expediente 5065 Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas

obligación de soporta, ello en atención a que las pretensiones de la demanda no se encuentran probadas de forma idónea.

Con fundamento en lo expuesto solicito declarar probada la presente excepción de mérito.

14. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DE PAGAR INTERESES DE MORA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

En este caso no es jurídicamente posible que se condene al pago de intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del C.Co. puesto que los demandantes en sede extrajudicial ni en esta instancia judicial han acreditados los presupuestos del artículo 1077 del C.Co. es decir, la ocurrencia del siniestro, consistente en la realización del riesgo asegurado, que se traduce en probar la responsabilidad del asegurado y mucho menos han probado la cuantía de la pérdida alegada, y ello se puede observar porque incluso desde la presentación de esta demanda no aportan prueba suficiente para afirmar que el señor Omar Tenorio ocasionó la colisión del 27 de enero del 2021 e igualmente tampoco se ha probado la procedencia del lucro cesante y demás perjuicios tal como lo solicitan en sus pretensiones. Lo anterior, en la medida en que se pretende el pago de un lucro cesante para el cual ni siquiera ha probado el vínculo laboral de la señora Ana Carolina Arenas Ramírez, y la supuesta pérdida de capacidad laboral en la que finca el pedimento, por ende, no satisface los presupuestos para que surja la obligación condicional del asegurador, y como aquella obligación nunca nació a la vida jurídica, es evidente que aquella no se encuentra en mora y por supuesto es completamente improcedente el pago de los intereses moratorios, a lo sumo, aquellos podrían ordenarse después de la sentencia que ponga fin al litigio, porque desde ese momento es donde se tiene certeza de la responsabilidad y de la cuantificación del perjuicio reclamado, es decir, de los elementos que dan lugar a la imposición de la obligación indemnizatoria a cargo de mi mandante y no antes, toda vez que, como ya se dejó ver en las anteriores excepciones hay un evidente ánimo de ganancia y carente de certeza en la cantidad de perjuicios reclamados.

Como sustento de lo anterior, se encuentra en primera medida que el artículo 1080 del Código de Comercio indica que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro y de los intereses de mora, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio. Ello supone, que el hito temporal a partir del cual empiezan a causarse los intereses no es otro sino el momento en el que se tiene certeza del cumplimiento de las dos cargas que impone la norma referida, esto es (i) se acredite la ocurrencia de siniestro en los términos de la póliza y (ii) se acredite con certeza el valor de la cuantía de la pérdida. Es decir, que los intereses se causan al mes siguiente de formalizado el siniestro, de la siguiente forma:

“(…) ARTÍCULO 1080. <PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES MORATORIOS>. <Inciso modificado por el párrafo del Artículo 111

de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.

El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.

El asegurado o el beneficiario tendrán derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior <inciso primero original del artículo>, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador (...)"

Al respecto, téngase en cuenta que la Corte Suprema de justicia, sala de casación civil, se encargó de hacer un estudio juicioso del tema en sentencia SC1947 del 26 de mayo de 2021, en la cual indicó que solo puede tenerse certeza del cumplimiento de estas cargas, a partir del momento en que queda ejecutoriada la sentencia que declara la responsabilidad del demandado, como se lee a continuación:

*"(...) Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, **se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo (...)**"³⁴*

Lo anterior implica sin lugar a duda que, cuando la aseguradora es demandada en un proceso judicial, la acreditación de la existencia y cuantía del siniestro que exige el artículo 1080 para detonar la mora de la aseguradora, solo puede entenderse satisfecha a partir del momento en que queda ejecutoriada la sentencia que declara la responsabilidad del asegurado, dado que es a partir de este momento en que se entienden cumplidas las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio.

Así mismo, en línea con lo expuesto indicó en la providencia lo siguiente:

³⁴ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo de 2021.

“(…) Estimar que con la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se reclama a la aseguradora la indemnización a su cargo, sobreviene la mora de esta última, como cuestión automática, comporta en un buen número de casos, anticipar indebidamente el momento en que ello tiene ocurrencia, pues como ya se analizó, la demostración del siniestro y de la cuantía de la pérdida puede ser resultado de la actividad probatoria cumplida en el proceso, incluso, en segunda instancia, comprobaciones que son necesarias para computar el mes previsto en el artículo 1080 del estatuto mercantil, cuyo vencimiento fija la mora del asegurador y, por ende, el momento desde el cual éste queda obligado al pago de intereses de tal linaje (…)”

Por lo antes expuesto es claro que en ninguna medida en este caso se ha cumplido con las cargas previstas en el artículo 1077 del C.Co, pues no se demostró la ocurrencia del siniestro en los estrictos términos del contrato de seguro, pues no hay prueba que establezca responsabilidad en cabeza del vehículo asegurado y, por el contrario, de acuerdo a las pruebas allegadas al expediente los hechos ocurrieron debido a la impericia y negligencia del conductor del vehículo UGP-67E, donde se desplazaba como pasajera la demandante. Tampoco se ha demostrado la cuantía de la pérdida, pues brilla por ausencia incluso en esta instancia judicial el medio probatorio idóneo para que se torne procedente las pretensiones concernientes al perjuicio patrimonial (lucro cesante), destacando que no se ha probado primero que la demandante Ana Arenas hubiera ejercido una actividad laboral, pues ha quedado claro que la misma era estudiante, y adicionalmente no se probó la supuesta pérdida de capacidad laboral, pues aun cuando se aportó un dictamen de pérdida de capacidad laboral al proceso, no se aportó ninguna prueba que acreditara la pérdida de ingresos de la demandante, pues ni siquiera se establecieron cuáles eran los ingresos que esta percibía antes de la ocurrencia del hecho, y no menos importante aún, el porcentaje PCL de 30.65% que arrojó el dictamen de autoridad competente es notoriamente menor al 45% que se estima en la demanda, adicionalmente no se probaron las estimaciones de los perjuicios extrapatrimoniales, así las cosas, aun en gracia de discusión a lo sumo a partir de la sentencia es en donde de manera irrefutable quedarían demostrados estos supuestos que dan origen a la existencia de obligación indemnizatoria a cargo de Mapfre Seguros y por ende como a la fecha ello no ha ocurrido no es posible considerar que la obligación se encuentra en mora.

En conclusión, como la mora en el pago de la obligación indemnizatoria requiere de la comprobación de la existencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, circunstancias que aún no se han probado debido a la clara inexistencia de responsabilidad a cargo de la parte pasiva y como aun en gracia de discusión tampoco se ha demostrado la cuantía de la pérdida porque no existe prueba que tienda a demostrar la procedencia del lucro cesante, y los fantasiosos perjuicios extrapatrimoniales, es claro que no puede predicarse la mora del asegurador, toda vez que, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación de indemnizar, razón por la cual no ha

nacido la obligación condicional del asegurador y por lo tanto es imposible hablar de mora alguna.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

15. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

En el presente caso nos encontramos ante una clara prescripción de la acción derivada del seguro comoquiera que, desde la ocurrencia del accidente de tránsito, siendo el 27 de enero del 2021, hasta la radicación de la presente acción judicial, la cual data del 07 de febrero del 2024, transcurrió más de dos años. Por ende, al tenor del artículo 1081 del Código de Comercio, se configuró el fenómeno extintivo.

Se debe dejar claro que en materia de seguros, el legislador ha querido consagrar un periodo de prescripción especial, de tal suerte que en el artículo 1081 del C.Co se establecen las clases de prescripción pero además contiene previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

*“(...) **ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>**. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria **será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.***

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Se destaca entonces el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria. Pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular y en especial, para establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil manifestó lo siguiente:

“(...) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971,

siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria (...)

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza típicamente objetiva, calidades estas que se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas –excluidos los incapaces- y “toda clase de personas” –incluidos estos-, respectivamente, y, de la otra, en el venero prescriptivo.

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...)), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento.”³⁵ (Subrayado fuera del texto original)

Por lo anterior, es evidente que el Despacho deberá declarar probada la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, situación que implica la imposibilidad de condenar a mi representada al pago de obligación alguna.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

16. EN TODO CASO, NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES No. 1501120012387

Sin perjuicio de lo expuesto en las excepciones precedentes, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación de mi representada, se formula esta, en virtud de que contractualmente en la póliza de seguro de automóviles No. 1501120012387, utilizada como fundamento para convocar a mi procurada al presente trámite, se estipularon las condiciones de la responsabilidad del asegurador, sus límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, etc. Estipulándose como límite máximo del valor asegurado determinado en la caratula de la póliza.

Ahora bien, es pertinente mencionar que la obligación del asegurador sólo se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por

³⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 2002. MP: Dr. Nicolás Bechara Simancas.

supuesto, la obligación indemnizatoria o de reembolso a su cargo se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo. Además de que también son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079, establece: “...El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada...”. Claro está, sin perjuicio del respectivo deducible pactado, es decir, de aquella porción que de cualquier pérdida le corresponda asumir al asegurado.

De acuerdo con los artículos 1079 y 1089 del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope máximo de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando no opere una causal de exclusión convencional o legal, como ocurre en el presente caso

Ahora bien, es importante señalar que de conformidad con el condicionado aplicable a la póliza de seguro No. 1501120012387, el valor señalado en la carátula de la misma es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar respecto al amparo de responsabilidad civil extracontractual.

Por consiguiente, en caso de ser condenados, existe un tope de la suma fijada en la carátula de la póliza de conformidad con lo concertado, dependiendo de la cobertura y lo anterior para la indemnización de todos los perjuicios. Así pues, en relación al contrato de seguro instrumentado a partir de la póliza de seguro, es importante señalar que para predicar algún tipo de obligación en virtud de la misma se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad plasmados en ella, los cuales se aprecian en la siguiente imagen tomada de la carátula de la póliza:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO 1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL LUC	3.000.000.000,00		NO APLICA

Por lo tanto, en el eventual, hipotético y remoto caso en que se determine la existencia de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, en ningún caso podrá superar la suma señalada en la caratula de la póliza siendo este el máximo valor al que mi procurada se obligó de conformidad con las condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

Solicito declarar probada esta excepción.

17. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto

a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

18. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa.

Solicito declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO II.

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA SOCIEDAD TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO TENORIO RIVERA LTDA y EL SEÑOR OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

FRENTE AL HECHO 1: Es cierto.

FRENTE AL HECHO 2: Es cierto.

FRENTE AL HECHO 3: Es cierto. Sin embargo, debe aclararse entonces que, la relación que vincula a mi representada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., al presente proceso como llamada en garantía es una relación jurídico comercial a la cual se deben aplicar las disposiciones propias del contrato de seguro, entre ellas las disposiciones de los artículos 1072 y subsiguientes del Código de Comercio. En este punto debe advertirse, que en el caso concreto dicha responsabilidad no podrá ser declarada bajo ningún contexto ni argumento jurídico o fáctico, pues no están reunidos ni acreditados los elementos del instituto jurídico de la Responsabilidad Civil Extracontractual. A lo anterior debe añadirse que en el presente asunto se estaría configurando una causal eximente de responsabilidad a título de hecho de un tercero que como destruye el nexo causal, exime de toda responsabilidad a los demandados, y en consecuencia a mi representada. Esto es así en tanto que incluso el Dictamen de Reconstrucción de Accidente de Tránsito que añadió la parte demandante al proceso da cuenta de que si el conductor de la motocicleta quien omitió una señal reglamentaria de "PARE" la hubiere respetado, el hecho no se hubiera presentado.

FRENTE AL HECHO 4: Es cierto. Sin embargo lo dicho en este hecho denota entonces que la obligación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., de responder en el presente asunto es una obligacional condicional que está sujeta precisamente a que el asegurado sea encontrado civil y extracontractualmente responsable por los hechos materia de litigio, luego entonces, si no se cumple esta condición, no nacería a la vida jurídica la obligación de la compañía aseguradora y por tanto MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA debería mantenerse indemne en el presente asunto. En este punto debe advertirse, que como ya se ha señalado en el presente líbello, dicha responsabilidad pues no están reunidos sus elementos estructurales, amén de que no existe nexo causal entre la acción u omisión del conductor del vehículo asegurado, pues en este asunto estamos ante la presencia del hecho de un tercero que funge como causal eximente de responsabilidad, a saber; la imprudencia e impericia del conductor de la motocicleta en la cual se movilizaba la demandante quien decidió infringir las normas de tránsito y omitir una señal de pare.

FRENTE AL HECHO 5: Es cierto. Sin embargo, nuevamente se reitera que al seguro al que se hace referencia trae consigo una obligación condicional cuya condición suspensiva es que se acredite la ocurrencia del siniestro, que no es otra cosa más que el riesgo asegurado, que para el caso en concreto es la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, luego entonces, hasta tanto está condición no sea declarada judicialmente, no habrá nacido a la vida jurídica la obligación de mi representada.

FRENTE AL HECHO 6: No se trata de un hecho, sino de una afirmación subjetiva de la parte demandante. En todo caso debe recalcar que no basta con que los hechos hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza para afirmar que los mismos se encuentran amparados por la misma, pues la póliza no podrá afectarse, ante la inexistencia de prueba de la realización del riesgo asegurado, consistente justamente en los perjuicios causados por la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, la cual a la fecha no ha sido objeto de declaración jurídica. Es ilógico que la parte demandante afirme sin mayor reparo que los hechos materia de litigio se encuentran amparados por la póliza, pues esto podría interpretarse como un reconocimiento tácito de su responsabilidad, la cual se insiste no ha sido ni probada ni declarada con respecto de los hechos objeto de discusión.

FRENTE AL HECHO 7: Es cierto.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PETICIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE A LA PETICIÓN 1: No me opongo a esta pretensión, sin embargo, frente a la misma debe tenerse en cuenta desde ya que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., al ser vinculada al presente asunto como llamada en garantía se trata entonces de una relación jurídica

frente a quien formula dicho llamamiento que debe ser analizada a la luz de las reglas técnicas y jurídicas del contrato que rige dicha relación, a saberse, el contrato de seguro. En ese entendido, al decidir el fondo del asunto y pronunciarse respecto de la relación jurídico sustancial existente entre quien formuló el llamamiento en garantía y mi representada deben tomarse en consideración todas las disposiciones jurídicas aplicables en materia del contrato de seguro, así como los amparos contratados, condiciones especiales, condiciones generales, límite al valor asegurado, exclusiones y demás elementos que se hayan pactado de mutuo acuerdo por las partes en el marco del negocio asegurativo.

FRENTE A LA PETICIÓN 2: Me opongo a esta pretensión, en el entendido que no bastará únicamente con que se llegase a condenar o lo que es lo mismo a encontrar a los llamantes en garantía como civil y extracontractualmente responsables por los hechos objeto de discusión, pues también debe analizarse que no se haya configurado ninguna exclusión o causal de no cobertura que se encuentren previstas en el condicionado particular y general de la póliza.

FRETE A LA PETICIÓN 3: ME OPONGO a la pretensión elevada por la llamante en garantía, que peticiona que a cargo de la Póliza número 1501120012387 se cubra cualquier el valor de la asistencia jurídica, en tanto que ese no es el objeto del litigio por el cual se llama en garantía a mi procurada. Para pretender cualquier tipo de reconocimiento por la señalada asistencia jurídica tiene que adelantarse dicha pretensión a través de un proceso judicial distinto al que nos ocupa, el cual se reitera es de responsabilidad civil extracontractual y nada tiene que ver con el reembolso de gastos por defensa judicial. Se reitera, no puede el llamante en garantía valerse de este proceso judicial, para intentar resolver en el mismo litigio controversias que definitivamente serían propias de otro trámite. Recuérdese que la etiología de la figura del llamamiento en garantía se circunscribe a exigir de otro la indemnización que se sufra o el reembolso del pago que tuviere que hacer. Sin embargo, es claro que la parte demandante no está mencionando en sus pretensiones ninguna cobertura por gastos de defensa, razón por la que claramente no puede, por sustracción de materia, la entidad de salud exigir esa cobertura vía llamamiento en garantía, pues excede de lo permitido por el artículo 64 del C.G.P.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

En los términos del artículo 206 del C.G.P., presento objeción al juramento estimatorio presentado en el llamamiento en garantía por la cifra de \$850.861.945, con fundamento en las siguientes apreciaciones; lo primero es señalar que dentro de dicho juramento se incluyeron los perjuicios extrapatrimoniales cuando la norma en cita es clara al referir que sobre esta clase de perjuicio no versara el juramento estimatorio.

Lo siguiente que se debe decir es que al hacer eco en este juramento de las pretensiones de la

demanda, el llamante en garantía incurre entonces en los mismos defectos y errores técnicos en los cuales incurrió la parte demandante y que ya fueron expuestos en su respectivo acápite al hacer referencia al juramento estimatorio de la demanda, pero que pueden resumirse en el haber empelado un porcentaje de pérdida de capacidad laboral “estimado” por la parte demandante, el cual resultó ser menor al realmente dictaminado por autoridad competente, añádase a esto el hecho de que no están presentado en el proceso los medios de prueba que acrediten que la demandante en efecto percibía algún ingresos al momento de la ocurrencia del hecho, o que esta tenía una elación laboral que justificara incluir en la tasación técnica del lucro cesante el 25% por concepto de factor prestacional.

Téngase en estos términos, y en los términos expresados frente al juramento estimatorio de la demandan, presentada la objeción frente al juramento estimatorio del llamamiento en garantía.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO ASEGURADO – INEXISTENCIA DE SINIESTRO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1072 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Sin perjuicio de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, se formula la presente de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza Colectiva Automóviles No. 1501120012387. Toda vez que de la mera lectura de la póliza podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual vinculada al presente litigio, la aseguradora indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado, con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en la póliza, pese a ello, en este caso no se vislumbra ningún elemento probatorio que permita estructurar el nexo causal entre conducta u omisión en cabeza del conductor del vehículo de placas UBX 418 y el daño alegado por el extremo demandante, máxime cuando en el presente asunto tal y como se alegó en el acápite de excepciones frente al a demanda nos encontramos ante un causal que rompe el nexo de causalidad y por tanto exonere a los demandados de responsabilidad, esto es, el **hecho de un tercero**, por ende esta particularidad enerva la posibilidad de pensar si quiera que se haya verificado el siniestro.

Es necesario señalar que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en su jurisprudencia que para que exista la obligación de indemnizar por parte de la compañía aseguradora, derivada del contrato de seguro, es requisito *sine qua non* la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo

establecido en el artículo 1072 del Código de Comercio. Al respecto tal Corporación ha señalado que si bien, el hecho condicional y el evento dañino, prima facie, suelen surgir simultáneos, suficiente para confundirlos, lo cierto es, para generar responsabilidad, al margen de los tiempos, ambos deben aparecer concurrentes en una misma o en diferente época. De tal suerte, hasta tanto no acaezca el riesgo, es meramente una condición suspensiva (artículo 1536 del Código Civil), que se halla en estado latente, virtual o potencial a la espera de que el acontecimiento futuro incierto acontezca o no (artículo 1530, Ibidem).

Realizado el riesgo por el cumplimiento de la condición (artículo 1072 del Código de Comercio), nace la obligación del asegurador, por haberse configurado el siniestro, de tal suerte, la configuración del siniestro es justamente el acaecimiento de la condición. En otras palabras la ocurrencia del riesgo asegurado es justamente lo que se denomina siniestro y por ende, corresponderá primero que se verifique ese siniestro para poder pensar si quiera en el análisis de la existencia de obligación indemnizatoria, pues para el caso de marras el riesgo lo constituye los daños causados a terceros derivados de la conducción del vehículo de placas UBX 418, evento que no ha sucedido, pues tal y como se dejó en evidencia, en el plenario obran elementos de conocimiento suficiente para alegar el acaecimiento de una causa extraña en la forma de un hecho de un tercero como causal que rompe el vínculo causal entre cualquier acción u omisión del conductor del vehículo de placas UBX 418 y el daño antijurídico cuyo resarcimiento buscan los demandantes a través del proceso declarativo de la referencia.

De acuerdo con lo anunciado anteriormente, en este caso encontramos que la responsabilidad imputable al asegurado no se ha estructurado, pues no existe nexos causal entre la conducta del conductor del vehículo de placas UBX 418 y la ocurrencia del accidente, puesto que, tal y como se afirma en el presente libelo, la causa determinante del hecho sería el hecho de un tercero, más concretamente el conductor de la motocicleta de placas UGP-67E quien infringió las normas de tránsito vigentes al saltarse una señal de “*PARE*” de lo cual da cuenta la codificación consignada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito.

Recordemos entonces qué se tiene establecido normativa y jurisprudencialmente al respecto, con el fin de respaldar la presente excepción. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se analizó este concepto y se explicaron de manera clara los requisitos para su operancia, así:

“(…) a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de este último;

b) También es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para eliminar el

riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producción del daño tuvo injerencia causal un elemento extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneración posible mientras no suministre prueba concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad;

c) Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan solo, que es únicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios coautores que a ella les son extraños, esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado este consagrado por el artículo 2344 del Código Civil que, por sabido se tiene y así lo recuerda con acierto el recurrente en varios apartes de su demandada de casación, hace parte tal disposición de un sistema normativo que en sus lineamientos fundamentales la Corte tiene definido en los siguientes términos: "...Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de los responsables, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguiente (...). Siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos ... (G.J. Ts. CLV primera parte, pág. 150 y CLXV, pág. 267, entre otras) (...)" (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 8/92. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

Jurisprudencialmente se han establecido tres (3) requisitos inexorables para que se configure la exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero: 1. Que el obrar del tercero sea ajeno al comportamiento de quien causó el daño, 2. Que sea un hecho imprevisible e inevitable y 3. Que ese hecho sea el que efectivamente causó el daño.

Para el caso concreto es evidente que se configura a todas luces el eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero. Lo anterior por cuanto concurren los tres (3) requisitos antes vistos para que sea declarado así: En primer lugar, se debe advertir que el bosquejo topográfico del IPAT y la información allí consignada permite colegir que el señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo,

no respetó la señalización de “PARE” que se encontraba en su carril. Obsérvese el siguiente extracto del IPAT:

13. OBSERVACIONES
* HIPOTESIS: NO RESPETA SEÑAL DE TRANSITO "PARE" (APLICA A UGP67E).

- **Irresistibilidad.**

Es relevante destacar que, para el conductor del vehículo de placas UBX-418, resultaba imposible resistir la acción desplegada por el señor Yohan Cuervo, quien, como conductor de la motocicleta de placas UGP-67E, desobedeció la señal de tránsito. En este contexto, debe entenderse que el conductor del vehículo UBX-418, Omar Tenorio, no tenía la capacidad de controlar las acciones de otros conductores, y la invasión del carril por parte del señor Cuervo constituye una circunstancia ajena a su control, configurando una conducta irresistible para él.

- **Imprevisibilidad**

En segundo lugar, es necesario señalar que para el conductor del automóvil era totalmente imposible prever que en el lugar donde ocurrió el accidente se presentaría una conducta como la omitir y desobedecer la señal de tránsito “PARE”. Dicho de otra forma, el conductor del vehículo de placas UBX-418, basado en las reglas de la experiencia y la buena fe, confió en que en la vía todos los conductores respetarían las normas y señales de tránsito. Por esta razón, resultó totalmente imprevisible que, para el momento del accidente, el señor Yohan Gabriel Cuervo Cuervo no respetara las señales de tránsito, supuesto que se acredita en el IPAT y en el bosquejo topográfico.

- **Emana de un tercero totalmente ajeno**

Como es evidente, el acto de invadir el carril contrario correspondió a un tercero que nada tiene que ver con el conductor, ni con el propietario del vehículo de placas UBX-418. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control del conductor del automóvil de placas UBX-418.

Por otro lado, debe tenerse presente que aun que la parte actora afirma que el señor Omar Rodrigo Tenorio conducía a exceso de velocidad, y no respetó la prelación vial de la motociclista y conducía con imprudencia e impericia, no hay una sola prueba de ello, toda vez que: (i) el exceso de velocidad requiere prueba técnica y dentro del presente asunto no existe ninguna prueba de dicho talante; esto es así en tanto que, si bien no se desconoce que la parte demandante allegó al proceso un dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito, si debe llamarse la atención que dentro de este se realizó un cálculo de la velocidad de los vehículos sin ninguna base técnica o científica. En efecto, en aquel dictamen se indica que el cálculo de la velocidad de los vehículos se realizara a partir de un simulador computacional que curiosa y llamativamente reportó que la motocicleta

transitaba justo en el límite de la velocidad, mientras que para el otro vehículo si arrojó un resultado de que doblaba su velocidad, esto empero, fue un cálculo realizado sin ningún tipo de sustento físico y/o matemático que soporte sus hallazgos y por tanto carece de la entidad probatorios para brindar certeza al Despacho respecto del hecho que pretende acreditar (ii) no hay prueba de que el señor Tenorio Trujillo haya omitido prelación vial; (iii) no se ha constatado una conducta imprudente que haya ocasionado la colisión, contrario a la parte demandante y al conductor de la motocicleta de placa UGP-67E donde en el IPAT se establece que fue este último quien desobedeció las normas de tránsito al no respetar la señalización de “PARE”. Es decir, queda en evidencia la infracción de las normas de tránsito fue en cabeza del conductor de la motocicleta en donde se desplazaba la señora Ana Carolina Arenas Ramírez.

De esa manera, es claro que en el presente asunto lejos de existir una prueba que vincule causalmente la acción u omisión del conductor del vehículo de palcas UBX-418 con la ocurrencia del hecho dañoso, lo que se ha acreditado es que acaeció una causa extraña en la forma de un hecho de tercero que rompe con el aludido nexo causal y que por lo tanto exonera de responsabilidad a los demandados, consecuencia lógica de lo cual no queda otra vía de acción en derecho que negar las pretensiones de la demanda. El escenario descrito también deja en claro entonces que no se ha materializado el riesgo asegurado, pues recuérdese que al tenor de lo dispuesto en la póliza colectiva automóviles No. 1501120012387, la Aseguradora cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual atribuible al Asegurado nombrado en la caratula de la póliza cuando este deba asumir un daño **derivado de una reclamación basada en una responsabilidad de carácter extracontractual y de la cual se pretenda obtener una indemnización**. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues ante la concurrencia de una causal exonerativa de responsabilidad a título de hecho de un tercero que rompe con el nexo de causalidad y por tanto exonerar de toda responsabilidad a los demandados, no procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro. Puesto que no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la Responsabilidad Civil Extracontractual.

En conclusión, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que tal como se dijo anteriormente nos encontramos ante una situación en la que más allá de que no existe prueba del nexo causal, pues no se ha demostrado que el daño alegado se produjo como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado, puede darse por acreditado que la verdadera causa determinante del hecho dañoso fue el hecho de un tercero completamente imprevisible e irresistible para el conductor del vehículo de placas UBX-418. Como consecuencia natural de ello, no ha nacido entonces la obligación condicional por parte de la Aseguradora, pues para que aquella pueda surgir a la vida jurídica necesariamente se requiere probar la existencia del siniestro que en este caso se traduce en la imperiosa necesidad de acreditar que el accidente de tránsito objeto de estudio fue provocado por la acción u omisión atribuible al conductor del vehículo asegurado, pero como aquello no se ha probado no es posible hablar de siniestro ni de la existencia de obligación indemnizatoria a cargo de Mapfre Seguros.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL SEÑOR OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO, PARA LLAMAR EN GARANTÍA A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

En el presente caso, el señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO carece de legitimación en la causa por activa para promover el llamamiento en garantía en contra de mi representada y pretender el reconocimiento de la prestación derivada del contrato de seguro expedido por mi representada, como quiera que no ostenta la calidad de tomador o asegurado dentro de la póliza colectiva automóviles No. 1501120012387, en otras palabras, no hacía parte del negocio aseguratorio, y por tanto no posee ningún vínculo contractual o jurídico en virtud del cual pudiese formular el llamamiento en garantía a MAPFRE SEGUROS GENERAL COLOMBIA S.A.. En tal sentido, se advierte que dicha legitimación radica únicamente en el asegurado de la mentada póliza, lo que significa que, para el caso concreto, la única persona que podría exigir el eventual cumplimiento del contrato de seguro sería la sociedad TRANSPORTE ESPECIALIZADOS RODRIGO TENOR RIVERA LTDA, quien es quien dentro del contrato de seguro figura como tomador, asegurado y beneficiario de la póliza.

En este orden de ideas no puede perderse de vista que la legitimación en la causa es el primer elemento que debe evaluarse antes de realizar cualquier estudio sobre un caso en particular. Puede ser activa o pasiva y ambas son un presupuesto procesal para que se dicte una sentencia. En los términos de la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia, en armonía con lo sostenido por Hernando Morales Molina está enfocado hacia los titulares de la relación sustancial que se debate; lo que en otros términos, constituye una coincidencia entre los titulares de la relación procesal con los titulares de la relación sustancial; de tal manera, que si al proceso concurren quienes no son parte de la relación sustancial invocada, se configura la falta de legitimación en la causa. En este sentido, la Corte ha precisado:

“5.- Si bien la posibilidad de que toda persona acceda a la administración de justicia es un principio de orden constitucional, tal garantía no es absoluta, ni su ejercicio puede ser producto del capricho o el arbitrio de los querellantes. Solamente el titular de derechos o quien puede llegar a serlo, está facultado para ponerla en funcionamiento, frente al obligado a respetarlos o mantenerlos indemnes.

El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los

intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.

De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda.

La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (...) En efecto, ésta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (cas. civ. sentencia de 1º de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N° 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N° 6050).”³⁶

Si los titulares de la relación procesal, quienes han acudido al proceso como demandante y demandado, respectivamente, coinciden con los titulares de la relación sustancial, se configura el presupuesto material de legitimación por activa y por pasiva; en caso contrario, cuando no existe esa coincidencia este presupuesto queda comprometido.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional definió la falta de legitimación en la causa como una cualidad subjetiva de las partes, derivada de la relación de estas con el interés sustancial que se discute en el proceso:

³⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia SC-4468 del 09 de abril de 2014, Exp. 0800131030022008-00069-01, M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez.

“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.”³⁷”

Lo anterior quiere decir que, teniendo en cuenta que el señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO, no ostenta la calidad de tomador/asegurado del contrato de seguro, y por tanto no se encuentra legitimado en la causa para reclamar las prestaciones que del contrato se derivan. Lo anterior, toda vez que no ostenta ninguna de las calidades requeridas (tomador / asegurado) para llamar en garantía a MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A. en este proceso. Dicho de otro modo, el señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO no es tomador o asegurado en la póliza de seguro, por tanto, no está legitimado para exigir en un proceso judicial el cumplimiento del contrato de seguro previamente identificado, puesto que la única que podría exigir tal cumplimiento sería la sociedad TRANSPORTE ESPECIALIZADO RODRIGO TENORIO RIVERA LTDA.

En conclusión, en este proceso está claro que la legitimación en la causa por activa para reclamar el cumplimiento de las prestaciones que del contrato de seguro se derivan, recae únicamente sobre la persona, natural o jurídica, que ostente la calidad de tomador o asegurado del contrato de seguro. Para el caso presente, el señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO no ostenta dicha calidad. Razón por la cual, solicito al Despacho tener como probada esta excepción frente a la ausencia de legitimación en la causa por activa del señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO, para llamar en garantía a MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.

Por todo lo anterior, se solicita al Despacho tener por probada esta excepción.

3. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA COLECTIVA AUTOMÓVILES No. 1501120012387

En materia de seguros, el asegurador según el Artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico

³⁷ Corte Constitucional, Sentencia T 1001 de 2006. Mp. Jaime Araujo Rentería.

en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio, de tal manera que, si durante el proceso se llega a probar los supuestos facticos en que se fundan las exclusiones de cobertura, no quedará otra salida que desestimar las pretensiones que se enfilaron en contra de mi mandante.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (arts. 1056 y 1127 del C. de Co.), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del Derecho de Daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la Póliza Colectiva Automóviles No. 1501120012387 en sus Condiciones Generales señala una serie de exclusiones para el amparo de responsabilidad civil extracontractual, las cuales se allegan como parte del seguro para que el despacho pueda apreciarlas de cara a la definición de la relación sustancial que involucra a mi mandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester señalar que si durante el proceso se logra establecer la ocurrencia de alguna de las exclusiones que constan en las condiciones generales y particulares de la póliza, aquella no podrá ser afectada, en tanto la situación se encontraría inmersa en una exclusión de cobertura que en virtud de la libertad contractual fueron acordadas por las partes del seguro. Por ende, el despacho de cara a definir las obligaciones que pueden surgir a cargo de cada una de las partes no puede pasar por alto el seguro en su integridad, con sus amparos y exclusiones puesto que aquel acto jurídico compone el límite de la asunción de los riesgos por parte de Mapfre Seguros Generales, luego si se prueba alguna causa de exclusión se frustra la posibilidad de imponer obligación alguna.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

4. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido ni a los perjuicios plenamente acreditados. Por lo anterior, si el despacho accediera a una indemnización en la manera en que fue solicitada en el escrito de

demanda, sin duda se desconocería este principio de mera indemnización. Para el caso concreto, los perjuicios que se han solicitado en la demanda no se han acreditado toda vez que: (i) no se aporta al plenario prueba que dé cuenta de los ingresos percibidos por la demanda y la PCL que trajo consigo la reducción en el valor de dichos ingresos; (ii) no se aporta prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas consecuencia del accidente pro las cuales sea procedente solicitar el reconocimiento del perjuicio moral; (iii) tampoco se aporta prueba alguna de la alteración a las condiciones de existencia que justifiquen los pedimentos del daño a la vida de relación y mucho menos del daño a la salud, toda vez que este último perjuicio no es reconocido en la jurisdicción ordinaria, que es en la cual nos encontramos y, finalmente (iv) no se encuentra acreditada la pérdida de oportunidad reclamada. De tal suerte que no es posible ni jurídicamente justificable el reconocimiento de dichos perjuicios pues de ser reconocidos en favor de la parte demandante, y consecuentemente imponerse la obligación de resarcimiento a mi representada, se estaría vulnerando el carácter meramente indemnizatorio que tiene el contrato de seguro en virtud del cual se llamó en garantía a mi representada a este proceso.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”³⁸

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello por lo que, aterrizando al caso en cuestión, no es de recibo indemnizar el daño tal y como es pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“(...) Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño

³⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065

emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Asegurado y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo tiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto de lucro cesante cuando es clara la ausencia de medios probatorios para acreditar la supuesta pérdida de ingresos por parte de la demandante, reconocer daño moral por un valor superior al establecido por la Corte Suprema de Justicia en estos casos, reconocer la indemnización por la pérdida de oportunidad cuando no se ha probado, o reconocer e indemnizar el daño a la salud cuando este no se trata de uno de los perjuicios reconocidos en esta jurisdicción, indiscutiblemente transgrediría el principio indemnizatorio que rige en los contratos de seguro.

Así las cosas y teniendo en cuenta que dentro del plenario no se demostraron los perjuicios solicitados en el pítitum de la demanda, su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio del que está revestido el contrato de seguro. Lo anterior, por cuanto en primer lugar, es inviable reconocer emolumento alguno referente al lucro cesante, puesto que se no se probaron los presuntos ingresos que la víctima percibía antes de la ocurrencia del hecho dañoso, así como tampoco se ha probado la existencia de una relación laboral que amerite la inclusión del factor prestacional en la estimación de las pretensiones, finalmente, la parte demandante empleó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 45% que “estimó” a cuenta propia, pero que resultó ser ampliamente superior al porcentaje de pérdida de capacidad laboral dictaminado de manera oficial por autoridad competente, el cual fue del 30.65% . En segundo lugar, es inviable el reconocimiento por el daño moral en las sumas pretendidas, pues desconocen los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, además de que no obra en el plenario prueba fehaciente de las supuestas afectaciones psicológicas sufridas por la demandante como consecuencia directa del accidente de tránsito. Aunado a lo anterior, no procede reconocimiento por daño a la vida de relación, pues este nunca se presume y en el presente asunto ninguna prueba hay de la alteración a las condiciones de existencia de la demandante que justifique su pretensión, menos aún puede reconocerse el supuesto a daño a la salud pues este no es un perjuicio que sea reconocido e indemnizado en el marco de la jurisdicción ordinaria. Finalmente, no existe prueba de la supuesta oportunidad o chance perdido para la demandante como consecuencia del hecho de

tránsito, por lo cual no hay certeza del daño alegado. En consecuencia, reconocer los perjuicios tal y como fueron solicitados, transgrediría el carácter meramente indemnizatorio que reviste a los contratos de seguro, lo que implica que más allá de procurar una reparación se desborda su finalidad para generar un enriquecimiento injustificado que el despacho no podría avalar.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

5. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA COLECTIVA AUTOMÓVILES NO. 1501120012387.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza Colectiva automóviles No.1501120012387 que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de Mapfre Seguros General Colombia S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“(…) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…).”*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados

en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)³⁹ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LUC	3.000.000.000,00		NO APLICA
2. COBERTURAS AL VEHICULO			
PERDIDA TOTAL POR DANOS Y TERRORISMO	86.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA TOTAL HURTO	86.300.000,00		NO APLICA
PERDIDA PARCIAL POR DANOS Y TERRORISMO	86.300.000,00		10% Min 1 (SMMLV)
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	86.300.000,00		10% Min 1 (SMMLV)
TERREMOTO,TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA	86.300.000,00		10% Min 1 (SMMLV)

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis Mapfre Seguros S.A. no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la Póliza. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

6. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura

³⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

alguna.

7. SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio, MAPFRE SEGUROS GENERAL COLOMBIA S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra los demandados, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza Colectiva Automóviles No. 1501120012387, con vigencia desde el 08/07/2020 a las 00:00 horas, hasta las 24 horas del 07/07/2021.

8. GENÉRICA O INNOMINADA

En atención al mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CAPÍTULO III. PRUEBAS, ANEXOS Y NOTIFICACIONES

I. FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

- **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS**

El artículo 262 del C.G.P. faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar, que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

“(…) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin

necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)" (Negrita y sublínea por fuera del texto original)

Entonces, cabe señalar que el juez solo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente esta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, entre ellos la Copia de inventario físico de vehículo automotor tipo motocicleta expedido el 03 de febrero de 2021. por el Mabel Cristina Valdivia.

- **OPOSICIÓN AL DECRETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL SOLICITADA**

Me opongo al decreto de la prueba solicitada por la parte demandante toda vez que, conforma a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 236 del Código General del Proceso “(...) *Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba* (...)”.

Por lo anterior, la inspección judicial resulta ser impertinente e inconducente debido a que la parte demandante cuenta con otros medios de prueba para corroborar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

- **OPOSICIÓN AL DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO:**

El pasado 11 de febrero de 2025 a través de memorial mediante el cual la parte demandante recorrió excepciones de fondo propuestas por uno de los integrantes del extremo pasivo de la litis, se aportó un dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito el cual fue elaborado por el perito Gustavo Adolfo Enciso,.

En primer lugar, dicho informe no puede ser tenido en cuenta como Dictamen Pericial, puesto que no cumple con los requisitos en el artículo 226 del Código General del Proceso. Los cuales se estudiarán a continuación en contraste con lo allegado en las pruebas documentales en el presente caso, así:

- *Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones:* Si de algo carecen los documentos aportados por la parte actora es de la claridad, precisión y detalle que exige la norma. Como quiera que en ellos se omite describir los fundamentos técnicos y científicos en los que tuvo fundamento en análisis realizado, pues de entre otras falencia, se denota

que al momento de calcular la velocidad a la cual se desplazaban los vehículos involucrados al momento de ocurrir el hecho de tránsito, no se exhibió una metodología que pudiera comprobarse, sino que se hizo solo a base de un análisis computacional, cuya validez no puede ser refrendada sin que antes se expliquen los fundamentos físicos y matemáticos bajo los cuales este actuó. Así mismo, es ilógico y hasta caprichoso que dentro del dictamen en un acápite se diga que el hecho se hubiera podido evitar si el conductor del vehículo #1, la motocicleta hubiera respetado la señal de pare, pero esto sea completamente ignorado y dejado de lado en el análisis de evitabilidad del hecho, imputando de esta manera caprichosa toda la responsabilidad del hecho sobre el vehículo asegurado, cuando se itera, el Informe Policial de Accidente de Tránsito da cuenta de la omisión de la señal de tránsito por parte del conductor de la motocicleta, circunstancia que fue referencia en la reconstrucción, por tanto puede inferirse que fue dejada de un lado para favorecer el resultado del dictamen.

- *La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística:* Ante este requisito, se denota que aunque con el peritaje se aportan una serie de documentos, estos fueron emitidos fuera del país, por lo tanto para refrendarlos y dales validez, debían de contar con la respectiva aprobación y visto bueno de la autoridad competente, lo cual no se observa.
- *La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere:* Al respecto, es claro que no fueron remitidos los documentos que acrediten la experticia alegada por parte del profesional. Pues a pesar de que fueron allegados unos documentos, estos al haber sido expedido por fuera del país requerían contar con la respectiva apostilla y validación ante las autoridades nacionales.
- .
- *Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente:* No se encuentra prueba al respecto dentro de las documentales allegadas al proceso con la demanda.
- *Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación:* Del dictamen pericial aportado se concluye con una sola lectura que carece de metodologías que permitan establecer la veracidad de lo allí enunciado. Toda

vez que como ya se dijo, el supuesto calculo de la velocidad de los vehículos para el momento de los hechos, carece de cualquier fundamento físico o matemático.

Dicho lo anterior, es claro es claro que no se cumplen expresamente todos los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso. Razón por la cual, solicito a su Despacho que el dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito aportado por la parte demandante, no sea tenido como prueba pericial por faltar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el artículo 226 del Código General del Proceso. Tal y como lo indicó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., en la cita que a continuación se presenta:

“Es del caso memorar que, conforme al artículo 226 ejusdem, quien pretenda hacer valer un dictamen en el proceso, debe acompañarlo de “los documentos que le sirven de fundamento y de aquello que acrediten la idoneidad y experticia del perito”, lo que significa que, la oportunidad para acreditar la aptitud es con el trabajo pericial”⁴⁰.

Así las cosas, resulta acertado indicar que el análisis de los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso tiene por objeto establecer la admisibilidad de la prueba en razón a los requisitos formales previstos en la legislación, los cuales, en caso de reunirse llevan al decreto del medio de prueba. Así, resulta improcedente decretar como pruebas periciales, las pretendidas por el extremo actor.

De manera subsidiaria, en el evento remoto hipotético e improbable evento en el que el Juez considere darle valor a esa prueba de un Dictamen Pericial, pese a que evidentemente no cumple los requisitos para ello. Solicito comedidamente que el perito GUSTAVO ADOLFO ENCISO, comparezca a la audiencia de instrucción y juzgamiento, o en su defecto a la audiencia en la que se practiquen las pruebas. Lo anterior, a efectos de ejercer de manera adecuada los derechos de defensa de mi representada y en ese sentido, efectuar la correspondiente contradicción del Dictamen en los términos del artículo 228 del C.G.P.

- **OPOSICIÓN AL DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ:**

⁴⁰ Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil. Expediente 110013103035201800348 01. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. Junio 30 de 2021

II. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

- **DOCUMENTALES**

Solicito se tengan como pruebas todos los documentos que obran en el expediente, y adicionalmente las siguientes que anexo a este escrito:

1. Póliza de Automóviles No. 1501120012387
2. Condicionado General de la Póliza de Automóviles No. 1501120012387.

- **INTERROGATORIO DE PARTE**

- a. Comedidamente solicito se cite a la señora ANA CAROLINA ARENAS RAMÍREZ, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación que relaciona en su libelo.
- b. Comedidamente solicito se cite a la señora MALLORY ARENAS RAMÍREZ, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El demandante podrá ser citada en la dirección de notificación que relaciona en su libelo.
- c. Comedidamente solicito se cite a la señora CLARA LUCIA RAMÍREZ MUÑOZ, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación que relaciona en su libelo
- d. Comedidamente solicito se cite al señor OMAR RODRIGO TENORIO TRUJILLO, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El demandado podrá ser citado a través de su respectivo apoderado y en las direcciones de notificación dispuestos por él en los escritos de contestación de la demanda.
- e. Comedidamente solicito se cite al representante legal de TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO TENORIO RIVERA LTDA., a fin de que conteste el

cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El demandado podrá ser citado a través de su respectivo apoderado y en las direcciones de notificación dispuestos por él en los escritos de contestación de la demanda.

- **DECLARACIÓN DE PARTE**

De conformidad con lo estipulado en el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete la declaración de parte del Representante Legal de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., a fin de que sea interrogado sobre los hechos relacionados en el presente proceso.

- **TESTIMONIALES**

- .PATRULLERO JOHNNY LEDESMA CHAVARRO, portador de la palca 248, quien suscribió el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A01194582, para que comparezca al proceso y resuelva el interrogatorio que se le formulara sobre los hechos materia de litigio, y en concreto sobre la codificación de la hipótesis que se encuentra en el mencionado dictamen. El agente de tránsito podrá ser citado a través de la Secretaria de Tránsito de Cali.
- .Señor YOHAN GABRIEL CUERVO CUERVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.836.537, quien para la fecha de los hechos conducía la motocicleta de placas UGP-67E, en la cual se transportaba la demandante. Bajo la gravedad de juramento manifiesto desconocer la dirección electrónica del testigo.
- Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y ss. del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar el testimonio de la Dra. DARLYN MARCELA MUÑOZ, asesora externa de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán, y puede ser citada a través del correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com, cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre las condiciones generales y particulares las coberturas de la Póliza de Seguro de Automóviles No. 3416118002609 y los fundamentos por los cuales se invoca la ausencia de cobertura del amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, los límites pactados, los deducibles concertados, disponibilidad de las sumas aseguradas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial.

- **.EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.**

Respetuosamente solicito como exhibición de documento, que la demandante Ana Carolina Arenas presente ante el Despacho la historia clínica comprendida entre el año 2005 y hasta la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento o la audiencia en la cual se practiquen las pruebas. La

mencionada prueba se encuentra en poder de la demanda, y no puede ser obtenida vía derecho de petición pues se trata de información de la cual es titular la demandante, y por tanto es objeto de protección.

- Solicito oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, para que remita con destino a este proceso todas las valoraciones médico legales que se hayan realizado a la señora ANA CAORLINA ARENAS, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 25 de noviembre de 2005.
- **DICTAMEN PERICIAL.**

Comedidamente anuncio que me valdré de un dictamen pericial de reconstrucción de accidentes de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de enero de 2021. Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

ANEXOS

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder general otorgado por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. mediante la escritura pública No. 1804 de la Notaría 35 de Bogotá.
- Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

NOTIFICACIONES

La parte actora, en la dirección física y/o electrónica consignada en el escrito de la demanda.

Los llamantes en garantía, en la dirección física y/o electrónica consignada en el escrito del llamamiento en garantía.

Mi representada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., en la en la Carrera 80N No. 6 71 de Cali – Valle. Correo electrónico: njudiciales@mapfre.com.co

El suscrito recibirá notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.